



— Universidad —
Inca Garcilaso de la Vega

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TESIS

**LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA Y SU INCIDENCIA EN EL
HACINAMIENTO POR PRISIÓN PREVENTIVA EN EL PERÚ
2021**

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
ABOGADO**

**AUTOR
HECTOR MISAEL CASTRO BUSTAMANTE**

**ASESORA
Dra. KARINA KAROL BARDALES BECERRA,**

**LIMA-PERÚ
MAYO, 2022**

Dedicatoria

Dedico esta tesis en principio a mí a Dios quién supo guiarme por el buen camino, dándome fuerza para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se me presentaban. A dos personas muy especiales que están en mi corazón; Mi abuela Justa, a mi tío Carlos y a mi padre Héctor y mi abuelo Pocho; quienes me enseñaron a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad, ni desfallecer en el intento, A mi madre Carmen a quien amo tanto, a mis hermanos Christian, Karen, Martin, a mi hermana Carmen por el apoyo incansable que ha tenido conmigo, mi tía Mary mi hermana mayor, mi tía Julia mi otra madre, por el cariño y amor que me dieron, en especial a mi gran familia, mi querida esposa Susan con quien comparto este logro y sacrificio, mis hijos Arianna, Diego y Andreita, que por ellos soy lo que soy, posiblemente en este momento no entiendan la trascendencia de mis palabras, pero cuando sean mayores, quiero que se den cuenta de lo que significan para mí. Son ustedes tres, la razón por la que me levanto cada día esforzándome por el presente y el reto del mañana.

Agradecimientos

Agradezco sinceramente a mis queridos docentes, a las actuales autoridades de mi querida Universidad, que en momentos de crisis han continuado apoyando a sus estudiantes; agradecer a mi asesora la Doctora Karina Karol Bardales Becerra, por su gran dedicación, apoyo y conocimientos brindados para la culminación de la presente investigación, y un agradecimiento muy especial al Doctor Julio Enrique Haro Carranza, quien en todo momento con el apoyo y sus consejos, pudieron inculcar en mí el anhelo de superación y desarrollo profesional.

Índice de contenidos

Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iii
Índice de contenidos	iv
Lista de Tablas	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCCIÓN	x
CAPÍTULO I	13
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN	13
1.1 Marco Teórico	13
1.1.1. Teorías relativas al objeto de estudio	13
1.1.2. Teoría seleccionada	14
1.2. Investigaciones respecto a la prisión preventiva.....	15
1.2.1. Antecedentes Nacionales	15
1.2.2. Antecedentes internacionales.....	16
1.3. Marco conceptual.....	19
1.3.1. Prisión preventiva	19
1.3.3. Vigilancia electrónica.....	20
1.3.4. Resocialización.....	20
1.3.5- Marco histórico de la prisión preventiva.....	21
1.3.6 Marco histórico de la vigilancia electrónica.....	24
1.3.7 Marco histórico del hacinamiento carcelario.....	24
1.3.8 La vigilancia electrónica, bases teóricas.....	27
1.3.9 Marco jurisprudencial de las variables de estudio	28
CAPÍTULO II	31
EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES	31
2.1 Planteamiento del problema.....	31
2.1.1 Descripción de la Realidad Problemática.....	31
2.1.2 Antecedentes Teóricos	38
2.1.3 Definición del Problema.....	40
2.1.3.1 Problema General.....	40

2.2	Finalidad y Objetivos de la Investigación	40
2.2.1	Finalidad	40
2.2.2	Objetivo general y específicos	40
2.2.3.	Delimitación del estudio.....	41
2.2.4	Justificación e importancia del estudio.....	41
2.3	Hipótesis y Variables	42
2.3.1	Hipótesis o Supuestos categóricos.....	42
2.2.4	Hipótesis.....	46
2.2.5	Variables e Indicadores	47
CAPÍTULO III		51
MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS		51
3.1	Población y muestra.....	51
3.1.1	La población	51
3.1.2	Muestra.....	51
3.2	Diseño (s) a utilizar en el estudio	51
3.2.1.	Tipo.....	51
3.2.2.	Métodos	51
3.2.2.1.	Generales	51
3.2.3.	Diseño.....	52
3.2.4.	Enfoque	52
3.1	Técnica (s) e instrumento (s) de Recolección de Datos.....	52
CAPITULO IV		56
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS		56
4.1.	Presentación de resultados.....	56
4.1.1	Naturaleza jurídica de la prisión preventiva	56
4.1.2	Los derechos vulnerados de los procesados con prisión preventiva	57
4.1.5	El hacinamiento carcelario como causa de la prisión preventiva	61
4.2.	Contrastación de Hipótesis/Supuestos categóricos	65
4.3.	Discusión de resultados.....	68
CAPÍTULO V		72
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		72
5.1	Conclusiones	72
5.2	Recomendaciones	74
Referencias bibliográficas		75

ANEXOS	81
ANEXO 1.- Matriz de coherencia interna	82
ANEXO 2.- Guía de entrevista aplicada.....	83
ANEXO 3.- Cuadro de especialistas en Derecho Penal	87
ANEXO 4.- Evolución normativa de la Vigilancia electrónica.....	88
ANEXO 5.- Informe de la Comisión Interamericana de DD.HH.- 2017	91
ANEXO 7.- Sentencia TC (2020). Exp. 05436-2014-PHC/TC Tacna.....	920
ANEXO 8.- Acuerdo Plenario N° 02-2019/CJ-116 - Vigilancia Electrónica P.	91

Lista de Tablas

Tabla 1	Resumen de las Reglas Mandela en materia de alojamiento.....	26
Tabla 2:	Matriz de operacionalización de variables.....	48
Tabla 3:	Abogados especialista en derecho penal: ¿Considera adecuada la prisión preventiva que se aplica en el Perú actual? - ¿Por qué?	60
Tabla: 4	Abogados especialistas en derecho penal: En su opinión ¿la prisión preventiva sería una de las causas que originan el hacinamiento penal en el Perú? ¿Por qué?	63
Tabla 5	Abogados especialista en derecho penal:En su opinión ¿cual será la importancia de la aplicación de la vigilancia electrónica en el deshacinamiento penitenciario?. ¿Porqué?	64
Tabla: 6	Costos diario y mensual de la vigilancia electrónica en el Perú	67

RESUMEN

La presente investigación tiene como tema principal la vigilancia electrónica y su incidencia en el hacinamiento carcelario por prisión preventiva en el Perú, teniendo en cuenta el grave problema de sobrepoblación de las cárceles principalmente por la aplicación intensa de la prisión preventiva y la aprobación de normas sobre la vigilancia electrónica personal. La formulación del problema de investigación se concreta en las siguientes preguntas: ¿De qué manera la vigilancia electrónica incide en el hacinamiento carcelario por prisión preventiva? Y tiene como objetivos específicos: comprender la naturaleza jurídica de la prisión preventiva y su contraste con la vigilancia electrónica; Identificar los derechos vulnerados de los procesados con prisión preventiva; comparar el tratamiento de la vigilancia electrónica del Perú con los países de la región; y analizar los resultados del uso de la vigilancia electrónica en relación con el hacinamiento penitenciario. Se justifica este estudio porque se analiza el grave problema que tiene la sociedad peruana debido a la aplicación excesiva de la prisión preventiva, como causa principal del hacinamiento carcelario, lo que conlleva a evidentes vulneraciones de derechos esenciales constitucionales y a la grave afectación de los derechos humanos de los internos. También se estudia por qué no se aplica intensivamente la vigilancia electrónica, a pesar de estar completamente regulada. La investigación correspondió a un paradigma interpretativo, de enfoque cualitativo y se aplicó métodos de la disciplina jurídica incluyendo en ellos al exegético, el hermenéutico, entre otros. Su diseño fue no experimental porque no se manipuló ninguna variable. Se aplicó la técnica de la entrevista a abogados especializados y se trabajó con la técnica de análisis documental para obtener importante información en cuanto a normas, jurisprudencias, teorías jurídicas, opiniones especializadas, etc. La investigación concluye con el análisis de los resultados, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones.

Palabras clave: Vigilancia electrónica personal, Hacinamiento carcelario, prisión preventiva e infraestructura carcelaria.

ABSTRACT

The main theme of this research is electronic surveillance and its impact on prison overcrowding due to preventive detention in Peru, taking into account the serious problem of overcrowding in prisons, mainly due to the intense application of preventive detention and the approval of regulations on personal electronic surveillance. The formulation of the research problem is specified in the following questions: How does electronic surveillance affect prison overcrowding due to preventive detention? And its specific objectives are: to understand the legal nature of preventive detention and its contrast with electronic surveillance; compare the treatment of electronic surveillance in Peru with the countries of the region; To identify the violated rights of defendants in preventive detention and to analyze the results of the use of electronic surveillance in relation to prison overcrowding. This study is justified because it analyzes the serious problem that Peruvian society has due to the excessive application of preventive detention, as the main cause of prison overcrowding, which leads to evident violations of essential constitutional rights and the serious affectation of the human rights of the interns. But it is also studied why electronic surveillance is not applied intensively, despite being fully regulated. The research corresponded to an interpretive paradigm, with a qualitative approach and methods of the legal discipline were applied, including exegetical, hermeneutical, among others. Its design was non-experimental because no variable was manipulated. The interview technique was applied to specialized lawyers and the documentary analysis technique was used to obtain important information regarding regulations, jurisprudence, legal theories, specialized opinions, etc. The investigation concludes with the analysis of the results, the discussion, the conclusions and the recommendations.

Keywords: Personal electronic surveillance, prison overcrowding, preventive detention and prison infrastructure.

INTRODUCCIÓN

La preocupación por la grave crisis social vigente en el Perú y agravada por el grave hacinamiento carcelario de nuestras cárceles en una situación de pandemia ocasionada por el Covid-19, con el sufrimiento y la afectación de importantes derechos fundamentales de los internos debido a la exagerada aplicación de la prisión preventiva y a la mínima aplicación de lo que conocemos como la vigilancia electrónica cuya regulación viene desde el 2010, incrementó el interés en realizar esta investigación titulada “La vigilancia electrónica y su influencia en el hacinamiento por prisión preventiva en el Perú”.

La vigilancia electrónica, también conocida como “grilletes electrónicos” son mecanismos alternativos a la prisión física o encarcelamiento, es decir son mecanismos de control que tienen como fin monitorear el tránsito de los procesados y condenados dentro de un determinado radio de acción. La normativa al respecto data desde el 2010 con la ley 29499, Ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y modifica el artículo 52 del Código Penal, modificada por el Decreto Legislativo 1322 Ley que regula la vigilancia electrónica personal del año 2017 y finalmente modificada por el Decreto Legislativo 1514 que optimiza la aplicación de la vigilancia electrónica personal. Sin embargo, al año 2021, el número de presos beneficiados con estas normas apenas alcanzaban a 24.

Con respecto al hacinamiento carcelario originado por prisión preventiva, se deja constancia que en el 2017 el Perú ocupaba el puesto 5 entre los países con mayores niveles de sobrepoblación en América, solo superados por Haití, el Salvador, Guatemala y Bolivia. El Perú contaba con 119% de sobrepoblación, Haití con 354.4 % (el más alto) y Canadá con 2.2% (El más bajo). El hacinamiento penal tanto en América como en el Perú se constituye en uno de los principales problemas que afecta los derechos humanos de la población penal. De acuerdo a cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mencionadas en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 2705/2018-CR, Congreso (2018). La sobre población peruana a diciembre de 2021 contaba con una capacidad de albergue (estructura) para 41,123 reclusos (100%) y el número de reclusos que contenía era de 87,245 (212%), es decir tenía una sobre población del 46,122 preso (112%) según el Sistema de información estadística penitenciaria de INPE (2022). Una sobrepoblación excesiva que afectaban los derechos humanos de los internos.

Se justifica este estudio porque se analizó el grave problema que tiene la sociedad peruana debido a la aplicación excesiva de la prisión preventiva, como causa principal del hacinamiento carcelario, lo que conlleva a evidentes vulneraciones de derechos esenciales constitucionales y a la grave afectación de los derechos humanos de los internos. Pero también se investigó por qué no se aplica intensivamente la vigilancia electrónica, a pesar de estar completamente regulada. Su diseño fue no experimental porque no se manipuló ninguna variable. Se aplicó la técnica de la entrevista a abogados especializados y se trabajó con la técnica de análisis documental para obtener información en cuanto a normas, jurisprudencias, teorías jurídicas, opiniones especializadas y también a importantes conclusiones y recomendaciones.

La presente tesis se encuentra dividida en 5 capítulos. El Capítulo I está destinado a los fundamentos teóricos de la investigación, esto es, se analizan las principales teorías que giran en torno al tema de las variables de la investigación como son la prisión preventiva, el hacinamiento penitenciario y la vigilancia electrónica, especialmente en su marco conceptual e histórico. Seguidamente, el Capítulo II aborda el problema, los objetivos, hipótesis cualitativa y las variables antes detalladas. Asimismo, el Capítulo III, desarrolla la parte metodológica de la investigación y la técnica e instrumentos de recolección de datos de información utilizados. El Capítulo IV se refiere a la presentación y análisis de resultados. Finalmente, en el Capítulo V, se expone la conclusión y las recomendaciones de la investigación.

El autor

CAPÍTULO I

**FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA
INVESTIGACIÓN**

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Marco Teórico

1.1.1. Teorías relativas al objeto de estudio

- **Teoría de los fines de la pena**

Respecto a la Teoría de los fines de la pena, Mir Puig, considera que existe dos grandes corrientes teóricas que colisionan. De un lado, los denominados progresistas invierten los términos de la relación, al determinar como base de la pena la defensa de la sociedad es decir la de proteger los bienes jurídicos y a la retribución, como la función del límite máximo para las exigencias de la prevención, con lo que se evita una sanción mayor a la que corresponde por el delito. Por otro lado, la corriente denominada conservadora, quienes consideran que la protección de la sociedad se basa en la retribución justa y en la determinación de la pena. Asimismo, conceden a los fines de prevención un papel complementario, dándole de esta manera un especial el protagonismo a la retribución. (Mr Puig, 2006, p. 88).

a) Teoría sociológica de la prisión preventiva

Sobre la teoría sociológica de la prisión preventiva Kostenwein considera diferentes interrogantes que finalmente resume en dos que le permiten explicar la influencia de la sociología en la prisión preventiva, siendo las siguiente: ¿qué lugar tiene el derecho en el nacimiento de las prácticas sociales? y ¿qué podemos decir del derecho en cuanto práctica social?. Considera que debemos alejarnos de una concepción formalista, para la cual observa una gran independencia entre el ámbito social y la regla jurídica, así de una visión instrumentalista. (Kostenwein, 2010, p.10).

b) Teoría general de las medidas cautelares penales

Respecto a la teoría general de medidas cautelares penales Pujadas Tortosa, desde una visión del modelo español, considera importante el aporte del profesor Ortells Ramos, difundido en 1978, Según el estudio realizado del fundamento de las medidas cautelares penales se ha intentado desde distintas perspectivas. Una de ellas es la determinación del género cautelar, interrogándose sobre la posibilidad de considerar la teoría general de medidas cautelares a determinados actos que se llevan a cabo en el proceso penal. Para el las medidas cautelares aplicadas en el proceso pen al deben desarrollarse de modo restrictivo. (Pujadas, 2014, p. 82).

c) Teoría del garantismo penal

De acuerdo con Luigui Ferrajoli el garantismo penal es entendido como,

en una primera acepción, es el derecho penal de los ordenamientos desarrollados es un producto predominantemente moderno. Los principios sobre los que se funda su modelo garantista clásico -la estricta legalidad, la materialidad y lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, el juicio oral y contradictorio entre partes y la presunción de inocencia- en gran parte son, como es sabido, el fruto de la tradición jurídica ilustrada y liberal (Ferrajoli 1989, p. 33).

1.1.2. Teoría seleccionada

La presente tesis se respalda en la Teoría sociológica de la prisión preventiva, porque describe y estudia un problema que afecta notoriamente a la sociedad peruana como es el hacinamiento provocado especialmente por la prisión preventiva, entre otros. Por ello, se coincide con Kostenwein cuando sostiene que la sociología jurídica “posee como disciplina para explicar su aplicación desmesurada, responde a las siguientes interrogantes ¿qué lugar tiene el derecho en el nacimiento de las prácticas sociales?, y a su vez, ¿qué podemos decir del derecho en cuanto práctica social?” (Kostenwein, Ezequiel 2010, p. 10)

1.2. Investigaciones respecto a la prisión preventiva

1.2.1. Antecedentes Nacionales

El magister Zapata, Luis en su tesis doctoral desarrollada en el año 2019 titulada “Prisión preventiva y la observancia del debido proceso en el distrito judicial del Callao”, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Perú, llega a importantes conclusiones, entre ellas: la que la existencia de naturaleza punitiva de la medida cautelar de la prisión preventiva, incide en la prevalencia al derecho de un juzgamiento imparcial; confirmó que el carácter personal del imputado afecta indubitadamente las garantías aplicables al proceso penal; que la convicción por existir indicios razonables garantiza el proceso judicial en el marco de equidad y justicia, de igual manera, al contrastar las hipótesis se ha llegado a determinar que el principio de la presunción de inocencia hasta declaración de culpabilidad, impacta en el cumplimiento de las resoluciones debidamente motivadas. (Zapata, 2019 p. 105) Es importante resaltar que la mayoría de investigaciones coinciden con este trabajo en el sentido que el exceso de aplicación de prisiones preventivas impacta negativamente en el principio constitucional de la presunción de inocencia que reza “Toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario”.

Seguidamente, William Castillo en su tesis “La Proporcionalidad en La Prisión Preventiva” del año 2018 ante la Universidad Nacional Federico Villareal, Perú, quien luego de realizada la investigación, concluye en lo siguiente:

- 1) La mayoría de los Jueces Penales de Turno de Lima Centro, al dictar la prisión preventiva proceden a fundamentar su proporcionalidad a pesar de que el Fiscal no lo hizo en su momento, actitud que demuestra el desconocimiento de los principios que se deben observar en el desarrollo de esta audiencia propia del sistema acusatorio implementado por el Código Procesal Penal.
- 2) A pesar de que, en el distrito judicial de Lima, rige el sistema acusatorio instaurado por el Código Procesal Penal solo para los delitos de corrupción y conexos, por mandato de primera disposición Complementaria Final de la Ley 30076, la prisión preventiva se debe dictar observando no solo las exigencias

del Código Procesal sino también sus principios rectores, en especial el de asignación de roles y el de independencia judicial.

3) Conforme a los principios de independencia judicial y de asignación de roles no permiten que el Juez supla al Fiscal en la fundamentación de la Prisión Preventiva por que, el Juez debe limitar sus decisiones a lo solicitado expresamente por el Fiscal, es decir, para el caso de esta investigación, conforme a los presupuestos fundamentados por el Fiscal. (...) (Castillo Dávila, 2018, p. 84).

1.2.2. Antecedentes internacionales

Se tiene la tesis “El Abuso de la Prisión Preventiva en el Proceso”, que constituye un Trabajo Procesal I- Seminario Sobre Aportaciones Teóricas y Técnicas Recientes, para la Universidad Nacional de la Pampa Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Argentina, en el año 2016, arriba a las siguientes conclusiones:

Fue tal la deformación que ha sufrido la detención preventiva por parte de los operadores jurídicos, llegando a un uso excesivo y desmedido, concibiendo indirectamente una inversión real del principio de inocencia, en el cual la persona investigada por la presunta comisión de un delito s tratada como el autor real del mismo (Rojo, N & Yoli, V 2016, p. 92).

Asimismo, se tiene trabajos de investigación relacionados con la vigilancia electrónica y el hacinamiento carcelario, se tiene la investigación de Jennifer Espinoza en la tesis para optar el título de abogada “Los Dispositivos Electrónicos como Medida Sustitutiva a la Prisión Preventiva, lejos de encaminarse a la Resocialización, van de Cabeza a la Reincidencia” del año 2018, en la Universidad Nacional de Loja, Ecuador concluyó principalmente en que:

1. La aplicación de la vigilancia electrónica no apoya a la resocialización del reo, sino que más bien conlleva a daños más graves como es la discriminación en varios aspectos en especial en lo social y laboral.
2. La vigilancia electrónica no ayuda a la reinserción del reo a la sociedad,

más bien se observa que éste vuelve a las conductas delincuenciales.

3. La sociedad considera negativo estas medidas porque permiten el libre tránsito de los delincuentes por la ciudad, con la gran posibilidad de delinquir nuevamente. (...) (Espinoza Poma & Loja, 2018, p. 126).

Por su parte, la tesista Maldonado en su investigación para optar el título de abogado en la Universidad Católica de Guayaquil vigilancia electrónica como medida a reducir la carga penitenciaria y sus alcances sociales en el Ecuador. Concluye que: “La puesta en práctica del mecanismo de vigilancia electrónica, simboliza ser un instrumento esencial y significativo, dado que contribuye a la disminución de la carga penitenciaria en el ámbito de Ecuador” (Maldonado López, 2017, p. 26)

Santillán Morales en su tesis Vigilancia electrónica y el hacinamiento en el Penal Sarita Colonia, Callao 2021, para optar el grado de abogada en la UCV, considera que:

El hacinamiento carcelario es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacio en las cárceles de una jurisdicción excede la capacidad de los reos. Ante ello, se precisa que el problema del hacinamiento en las cárceles no son acontecimientos nuevos, sino que se han estado vigente durante muchos años. La principal causa del hacinamiento carcelario es la excesiva praxis de la prisión preventiva, que repercute en el aumento de la población penitenciarias, otro problema se debe a la falta de infraestructura del régimen penitenciario que impide implementar unos ambientes adecuados para que el reo pueda ser reeducado y resocializado, y también para que acciones sus actividades sistemáticas. Este problema puede ser remediado por medio del mecanismo de vigilancia electrónica el cual se emplea para procesados y condenados, de ser así, se disminuiría la sobrepoblación penitenciaria (Santillán Morales, 2021, p. 23).

Gonzales Giancarlos, en su tesis desarrollada en el año 2020 titulada “la vigilancia electrónica como alternativa a la prisión preventiva y su contribución al deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios” para optar el grado de Abogado en la Universidad Señor de Sipán, llega a la siguiente conclusión:

Finalmente se puede concluir que ante el hacinamiento, la falta de infraestructura y excesivo uso de la medida cautelar de prisión preventiva; una de las forma de contribuir en el deshacinamiento de los establecimientos penales sería mediante el uso de grilletes electrónicos, así también tendría un menor costo para el estado tener personas que estando aún en calidad de procesados continúen trabajando y así aportando a su economía familia y personal, no siendo así una carga para el estado en lo que concierne a manutención y también de la manera en que la familia se quedaría en la orfandad, hasta que se determine la responsabilidad del imputado en algún hecho delictivo. Además, con el uso de la tecnología se aplicaría verdaderamente y solo de manera excepcional la prisión preventiva, cuando esta distinción ya está generada, pero que la realidad como bien se demuestra es otra (Gonzáles, 2020, p. 46)

1.3. Marco conceptual

Entre los términos más importantes de la presente investigación se puede conceptuar a las siguientes:

1.3.1. Prisión preventiva

Para la presente investigación y de acuerdo con la postura del investigador, la prisión preventiva debe ser entendida como una medida excepcional de coerción de carácter personal aplicada en casi todos los países de América y consiste en la privación de la libertad del imputado con el fin de cautelar que se lleve en forma regular el proceso penal, evitando el peligro procesal. Esta medida se encuentra tipificada en el artículo 268 del Código Procesal Penal Peruano (SPIJ, 2022, s/n).

1.3.2. Hacinamiento penal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el hacinamiento penal, considera, entre otras características que ésta es la consecuencia previsible de los siguientes factores: el uso excesivo de la detención preventiva y de la privación de libertad como sanción penal; la falta de una respuesta rápida y efectiva por parte de los sistemas judiciales y entre otras la tramitación de las peticiones de libertad condicional; la falta de infraestructura adecuada para alojar a la creciente población penitenciaria; la implementación de políticas represivas de control social que plantean la privación de la libertad es decir la aplicación de la “mano dura” o “tolerancia cero”;; CoIDH, 2017, pp. 15-16).

Se considera de mucha importancia la emisión de este informe “Medidas para reducir la prisión preventiva- Organización de Estado Americanos - OEA” de la Comisión de Derechos Humanos (CoIDH) realizada el 2017,

Es un hecho que el hacinamiento colisiona con los derechos fundamentales de la persona humana. Al respecto Colomer Vega (2021, p. 20) expresa que:

Es así que, los derechos fundamentales ocupan una posición central en el sistema jurídico de los Estados democráticos. No por casualidad la Constitución Española (CE) dedica su Título I, el más extenso de todos (arts. 10 a 55 CE), a la regulación de tales derechos. El primero de sus preceptos —el art. 10.1 CE— atribuye a los derechos fundamentales la condición de “fundamento del orden político y de la paz social”. Con esta expresión se remarca la dimensión objetiva o institucional de los derechos fundamentales, esto es, su consideración como “elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica” (Colomer Vega 2021, p. 20)

1.3.3. Vigilancia electrónica

En el Perú mediante Decreto Legislativo 1322, se define que es

Una forma de controlar y monitorear eficientemente el tránsito o movimiento de las personas procesadas o condenadas dentro de un radio de desplazamiento ya identificado por el beneficiario de la vigilancia electrónica, teniendo como punto de partida el lugar que estos señalen, pudiendo ser por ejemplo su domicilio habitual. La vigilancia electrónica personal para el caso de los procesados se podrá aplicar a solicitud del imputado o como alternativa a la prisión preventiva aplicada por el juez, a fin de garantizar la presencia de los procesados en el litigio judicial. (SPIJ., 2022, s/n).

1.3.4. Resocialización

Espinoza citando a Guillamondegui entiende que la palabra Resocialización comprende el proceso que se inicia con la estancia del condenado en prisión, mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, con la colaboración del

personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que este pueda tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo pretérito y de sus implicancias personales, familiares, sociales presentes y futuras, con el propósito de fomentar y consolidar de su capacidad de convivir en sociedad respetando la ley penal en lo sucesivo (Espinoza, 2018, p. 24).

1.3.5- Marco histórico de la prisión preventiva

La prisión detención o preventiva tiene larga data en la historia penal peruana, entre ellas se puede mencionar al Código de enjuiciamiento en materia criminal de 1920. Esta normatividad se promulgó por Ley 4919 el 2 de enero de 1920, por el expresidente Augusto B. Leguía y entro en vigencia el 18 de marzo de 1920 hasta el 17 de marzo de 1940; en el cual se regulaba, el tema objeto del presente estudio, en el Título V del Libro Primero, denominado principio de la instrucción y detención del acusado.

No obstante, con el transcurso del tiempo esta normatividad ha sufrido una serie de modificaciones adicionales.

La historia de la prisión preventiva ha trascendido a lo normativo y ha arribado a nivel jurisprudencial de los principales organismos jurisdiccionales, la CoIDH mencionado por Llobet Rodríguez, en su informe denominado “Presunción de inocencia” sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América señala:

El uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia (Llobet, 2009, p. 121) .

La prisión o detención preventiva ha evolucionado conforme lo ha hecho los sistemas jurídicos penales del inquisitivo al acusatorio adversarial garantista.

Así, el Sistema Inquisitivo que, su extinción se viene dando en muchos países del mundo, según Giovanna Vélez tenía las siguientes características:

El Juez determina subjetiva y objetivamente la acusación; la investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las realiza el juez-acusador; no existe correlación entre acusación y sentencia. El Juez puede en cualquier momento alterar la acusación; no hay contradicción ni igualdad; no hay partes, los poderes del juez son absolutos frente a un acusado inerte ante él. Lo normal es la detención.

En el sistema inquisitivo no se dio la importancia debida al derecho de defensa. Es más, la presunción de inocencia se hallaba por debajo de la presunción de culpabilidad, la misma que sólo se desvanecía si el imputado lograba soportar las torturas que se aplicaban para que admitiera la responsabilidad en el delito (Vélez, G. 2010, p. 4).

El antiguo Código Procesal Penal, establecido por el Decreto legislativo N° 638, establecía en su artículo 135, que el juez puede dictar mandato de detención si atendiendo a los primeros recaudos acompañados por el Fiscal Provincial sea posible de determinar que existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad; y, que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. Como se observa, la norma es de carácter genérica y no excepcional, desfavoreciendo al imputado que es lo que caracteriza al sistema inquisitivo.

Con la evolución hacia el sistema acusatorio adversarial garantista en el caso peruano cuya característica describe Vélez, Giovanna considera que:

El acusado es considerado como un sujeto de derechos, y su posición respecto al acusador es de igualdad, desprendiéndose de esta situación principios como el *in dubio pro reo*, y la presunción de inocencia (Vélez, G. 2010, p. 5).

Por ello, en este sistema, mientras que la libertad es la regla, la detención preventiva es la excepción. Es por ello que, la prisión preventiva se encuentra regulado por el Decreto Legislativo Decreto 957 Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), promulgado el 22 de julio de 2004 y publicado el 29 de julio de 2004. Entró en vigencia el 1 de julio de 2006.

Con respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva, Juan Sánchez, reflexiona respecto a esta dando cuenta de sus antecedentes jurídicos diciendo antes, con el Código Procesal Penal (1991), que se aplicaba simultáneamente con el Código de Procedimientos Penales (1940), se normaba el mandato de detención, que implicaba la privación de libertad y éste se hacía solo por escrito y de la misma forma se resolvía. Con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30076, del 19 de agosto de 2013, se adelantó la vigencia de la figura de la prisión preventiva, propia del Código Procesal Penal de 2004, a todo el país. El considera que la prisión preventiva es la decisión judicial de coerción personal más extrema grave, pues importa la privación de libertad personal, antes de la última etapa del proceso penal que es la sentencia y que implica una colisión grave a un principio universal señalado claramente en nuestra Constitución Política, como es la presunción de inocencia sobre la base de la existencia del peligro procesal.

Lo antes mencionado debió servir para que todo el país vaya acogándose a estos principios de reforma procesal penal que son, especialmente, la libertad que se expresa a la aplicación excepcional de esta medida; la contradicción, inmediación, entre otros. Según el autor existen motivos para pensar que estos principios, especialmente el de la libertad, han sido dejada de lado o que el esfuerzo realizado por ella ha sido insuficiente. (Sánchez, J, 2021, p. s/n).

Igual criterio tiene numerosas jurisprudencias, sentencias del Tribunal Constitucional e informes de la Defensoría del Pueblo, que se analizarán en otros acápite del presente informe.

Asimismo, se tiene una importante sentencia del Tribunal Constitucional que en una demanda de hábeas corpus, se ha pronunciado en contra de estas medidas de prisión preventiva por violar importantes principios del derecho procesal penal, entre ellos el que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos por la ley y la presunción de inocencia. Asimismo, ha establecidos criterios de interpretación para la actuación de los jueces, siendo uno de los más importantes el siguiente:

La prisión preventiva es una regla de última ratio, así como una medida excepcional y subsidiaria. El juzgador tiene la obligación de motivar adecuadamente sus decisiones, debiendo la resolución contar con una “motivación cualificada”, despejando la arbitrariedad (STC.N°4780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC, fund. 32- 39).

1.3.6 Marco histórico de la vigilancia electrónica

Los sistemas penitenciarios del mundo vienen aplicando diferentes instrumentos de apoyo a la vigilancia penitenciaria con el fin de disminuir el grave problema del hacinamiento de la población penal.

Así, Villacorta Pereyra, mencionando a Leal, decía que:

Es posible identificar tres fases en el desarrollo de esta tecnología. La primera fase se inició en 1960, a través del uso de un dispositivo portátil de dos piezas llamado BehaviorTransmitter-Reinforcer (BRT-R), cuyo objetivo era determinar la ubicación y controlar el comportamiento de una persona mediante el envío de una señal ante la detección de un comportamiento inadecuado. La segunda fase se caracteriza por una profunda apatía hacia el uso de tecnologías de vigilancia electrónica: dicha fase se extendió desde 1970 hasta 1984. Mientras tanto, la tercera fase fue el resultado de la labor del juez norteamericano Jack Love y el ingeniero Michael Goss, quienes diseñaron conjuntamente un brazalete conectado a un radar que indicaba la posición del usuario. Por lo que es menester entender, que la vigilancia electrónica se mantenía desde el imperio romano se mantenía como una de las posibilidades dentro del procedimiento penal, en aquel entonces se le conocía como Custodia Libera. Se designaba a un tercero, quien garantizaba en su domicilio la permanencia del imputado con la ayuda de soldados (Villacorta Pereyra 2021, p. 17),

1.3.7 Marco histórico del hacinamiento carcelario

Con relación a la variable el hacinamiento penitenciario y vigilancia

penitenciaria se puede exponer los siguientes estudios doctrinarios:

Ariza Higuera sostiene que:

El hacinamiento suele ser visto como un problema de escala nacional, es decir, que se desprende de los problemas político-criminales que enfrenta un país en concreto. Aunque, por supuesto, como ya lo señalaba Carranza para el caso latinoamericano, el hacinamiento es una de las manifestaciones más claras del desarreglo de una política criminal reactiva y populista, que acude irreflexivamente al uso generalizado de la prisión como principal respuesta a los conflictos sociales (Binder, 2010, pp. 213-229), también es “el reflejo de la tendencia global más amplia del encarcelamiento masivo” (Ariza 2019, p. 16).

De “las reglas Nelson Mandela”, que como sabemos fue un distinguido político sudafricano que paso muchos años recluido sin ninguna comodidad digna de un ser humano y posteriormente fue elegido presidente democrática de su país. Ariza Higuera,(2019, p. 11), ha realizado un resumen relativo al problema de hacinamiento, tal como lo observamos en la Tabla 1:

Tabla 1

Resumen de las Reglas Mandela en materia de alojamiento Fuente

Fuente	Temática	Contenido Regla Mandela
Regla Mandela 11	Separación entre reclusos	Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles
Regla Mandela 12	Dormitorios	<p>1. Cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será ocupado por un solo recluso. Si por razones especiales, como el exceso temporal de población reclusa, resulta indispensable que la administración penitenciaria central haga excepciones a esta regla, se evitará alojar a dos reclusos en una celda o cuarto individual.</p> <p>2. Cuando se utilicen dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para relacionarse entre sí en esas condiciones. Por la noche se les someterá a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.</p>
Regla Mandela 13 y 14	Alojamiento: Espacio, iluminación, ventilación	<p>Los locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los dormitorios, deberán cumplir todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción y la ventilación.</p> <p>En todo local donde vivan o trabajen reclusos: a) las ventanas serán suficientemente grandes para que puedan leer y trabajar con luz natural y estarán construidas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) la luz artificial será suficiente para que puedan leer y trabajar sin perjudicarse la vista.</p>
Regla Mandela 1	Hidrosanitarios	Las instalaciones de saneamiento serán adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente.
Regla Mandela 16	Baño y ducha	Las instalaciones de baño y de ducha serán adecuadas para que todo recluso pueda bañarse o ducharse, e incluso pueda ser obligado a hacerlo, a una temperatura adaptada al clima, y con la frecuencia que exija la higiene general.
Regla Mandela 17	Higiene	Todas las zonas del establecimiento penitenciario que frecuenten los reclusos deberán mantenerse limpias y en buen estado en todo momento.
Regla Mandela 21	Hora de aire libre. (Gestión penitenciaria)	Todo recluso que no desempeñe un trabajo al aire libre dispondrá, si las condiciones meteorológicas lo permiten, de al menos una hora al día de ejercicio físico adecuado al aire libre.

Nota: (Ariza Higuera, 2019, p. 11).

Como se observará Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también llamadas “Reglas Nelson Mandela”, son el instrumento internacional más comprensivo sobre la protección de las personas privadas de la libertad y es considerado actualmente como el estándar mínimo exigido por el Derecho Internacional a todos los países integrantes de esta organización internacional.

En el caso peruano el Tribunal Constitucional ha conceptuado claramente esta problemática no es un problema reciente, ni exclusivo de la región ni de nuestro país. Asimismo, no es causado únicamente ni principalmente por la deficiente infraestructura de los pabellones o la falta de establecimientos penitenciarios, sino, en realidad, por diversas políticas sobre aumento de penas y persecución penal. (STC 2020 Exp. N.º 05436-2014-PHC/TC, p. 106).

1.3.8 La vigilancia electrónica, bases teóricas

a) La facultad sancionadora del Estado

Ha estado presente desde que se creó el Estado, si nos atenemos a las teorías contractualista propuesta por Hobbes en la que este nuevo Poder creado, se reservaba la facultad de la “violencia legítima” del *jus puniendi*, para sancionar a cualquiera de los súbditos que osara incumplir las reglas que este emitía. De allí provienen las sanciones penales de prisión o ejecución. El derecho penal es el instrumento para que el Estado ejercer la *ius puniendi*, frente a ataques que se consideran indeseables.

El Tribunal Constitucional ha establecido que:

En cuanto a la pena, cabe precisar que siendo ésta uno de los principales instrumentos que utiliza el Estado para exigir el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico, su función no puede encontrarse desvinculada de la función que a su vez cumple el Estado. De este modo, como lo sostiene Mir Puig, se puede afirmar que existe una vinculación axiológica entre la función de la pena y la función del Estado y que “No sólo la pena, sino también el delito han de encontrar, pues, su fundamento en la

concepción citado Estado social y democrático de Derecho, que se convierte así en el soporte de los dos pilares sobre los que gravita todo el sistema (teleológico) de la pena del Derecho penal (STC, Exp. N° 0012-2006-PI/TC, p. 13).

Alva Meneses sobre la misma materia considera que:

Dentro de la relación entre el sujeto condenado y el estado nunca debe olvidarse que existe un fin último para la sanción a la que se ha sometido al sujeto en cuestión: “la resocialización”, de manera que dicho individuo pueda reintegrarse a la sociedad y no vuelva a incurrir en actividades ilícitas. Ahora bien, habiendo demarcado este punto, tenemos por otro lado al hacinamiento, el cual es una situación que consiste en mantener una alta tasa de población en las cárceles frente a la capacidad reducida en la que operan, haciendo mella así a la calidad de vida en la que se desenvuelven los reos (Alva Meneses 2021, p.16).

1.3.9 Marco jurisprudencial de las variables de estudio

El Poder Judicial ha manifestado su preocupación por el exceso de pedidos de prisión preventiva y ha aprobado jurisprudencia de carácter vinculante respecto a esta materia. Una de las más importante es la CASACIÓN N.º 626-2013 MOQUEGUA, en la que ordena que en la audiencia donde se debatirá la prisión preventiva, el fiscal debe motivar oralmente y por escrito, la proporcionalidad de la medida y su duración. Ello se expresa en lo siguiente:

“Vigésimo segundo. Finalmente, se fundamentará la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, la magnitud del riesgo procesal acreditado, así como su duración. El Fiscal debe motivar en su requerimiento escrito, conforme al artículo ciento veintidós del Código Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando por qué es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. La defensa podrá cuestionarlo”. (CASACIÓN N.º 626-2013 MOQUEGUA. F. 22).

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto a esta materia y en su Sentencia expedientes. Ha establecidos criterios de interpretación para la actuación de los jueces, siendo uno de los más importantes el siguiente:

“La prisión preventiva es una regla de última ratio, así como una medida excepcional y subsidiaria. El juzgador tiene la obligación de motivar adecuadamente sus decisiones, debiendo la resolución contar con una “motivación cualificada”, despejando la arbitrariedad. (STC, Exp. N° 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC fundamentos 32- 39).

El Tribunal Constitucional, respecto al grave problema declara el Estado de Cosas Inconstitucionales en los Hacinamientos Penales. (STC Exp. N°. 5436-2014-PHC-TC, (fundamento 107). El magno Tribunal consideró que existían deficiencias de albergue, calidad de infraestructura, instalaciones sanitarias como: la salud, seguridad y servicios básicos a nivel nacional. Dispuso que se realicen una serie de actividades para mejorar esta situación dando un plazo hasta el 2025 para que se cumpla. En caso contrario se dispondrá el cierre temporal de los establecimientos penitenciarios. Para lo cual exige el trabajo conjunto y coordinado entre el Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general. (STC. 5436-2014-PHC-TC, fundamentos 42-44). (Tribunal Constitucional, 2020, p. 42,43 y 44)

CAPÍTULO II

EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES

CAPÍTULO II

EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1 Planteamiento del problema

2.1.1 Descripción de la Realidad Problemática

La sociedad brinda al Estado la posibilidad de aplicar la fuerza coercitiva, en casos de suma relevancia contemplados en el ordenamiento jurídico; para lo cual, el Estado deriva el poder de control social al derecho punitivo o derecho penal, tal es así que Felipe Villavicencio considera que “el derecho punitivo, es aquel que se encarga de establecer sanciones, penas y medidas de seguridad, frente a actos que afecten a la sociedad y el ordenamiento jurídico” (Villavicencio 2006, p. 45), empero, la aplicación de dichas sanciones es aplicables únicamente cuando los otros métodos de control social resulten inviables, en base a la aplicación del principio de ultima *ratio legis*.

El Estado deriva la administración de justicia al poder judicial el mismo que mediante los jueces ejercen la principal función de resolver la controversia jurídica (declarar la responsabilidad penal o absolución del procesado). Para esto se tiene que dar el debido cumplimiento de los parámetros constitucionales y procesales inherentes al debido proceso, para tal efecto el estado mediante el proceso penal a determinado sujetos sobre los cuales se basaran el debate probatorio, por lo que en mérito al sistema acusatorio de atribuyen funciones al Ministerio Público, cuyo principal representante es el fiscal, quien es defensor de la legalidad y titular del ejercicio de la acción penal, ya sea de oficio o a petición de parte.

Empero, esta postura cuenta con numerosos detractores que afirman la gran importancia de la prisión preventiva, tales como Amoretti, el cual afirma que “mediante la aplicación de la prisión preventiva es pasible la vulneración del precepto de presunción de inocencia, empero, no se debería de olvidar que esta aplicación desmedida corresponde a la exigencia fáctica y en solución a problemáticas procesales” (Amoretti, 2008, p. 135). Por dichos motivos, los legisladores establecieron que para la aplicación de la prisión preventiva era necesario que se cumpla religiosamente los preceptos que taxativamente el Código Procesal Penal

impone antes de buscar la aplicación de esta medida.

La implementación del CPP ha traído consigo una serie de medidas destinadas a garantizar la intervención del procesado durante la investigación y del desarrollo del juicio.

En tal sentido, podemos afirmar que la aplicación de la prisión, como medida coercitiva de mayor relevancia, se encuentra direccionada únicamente a aquellos infractores de las normas que taxativamente el ordenamiento jurídico impone. Empero, existen aquellas excepciones a la regla general, tales como la prisión preventiva, que en esencia representa la restricción de la libertad, como bien jurídico de suma relevancia, sin la necesidad de la existencia de una decisión firme, por parte del magistrado, entorno al hecho delictivo.

Es así que, del trabajo sistematizado del Ministerio Público, mediante el fiscal, y el juez se puede dictar una serie de medidas a favor de la sociedad, siendo la de prisión efectiva la más dañosa, debido a que impone al actor del hecho ilícito, la reclusión en los sistemas carcelarios; con la finalidad de salvaguardar a la sociedad y/o resocializar al actor de acto criminal, en aplicación del Art. IX del Título Preliminar del Código Penal; al margen de las abundantes críticas que existen, debido a la imposibilidad fáctica de la resocialización en los centros penitenciarios, debido a las subculturas que proliferan en dichos sectores.

Tal es así, que, para la aplicación de la prisión preventiva, solicitada por el fiscal, se debe de corroborar la existencia de una serie de requisitos del Código Penal Peruano, que taxativamente impone nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 268 de dicha norma sustantiva.

En primer lugar, la existencia de fundados y graves elementos de convicción, que tribuyan la autoría del hecho delictivo o criminal al sujeto procesado.

En segundo lugar, la aplicación de la denominada prognosis de pena, que es aquel que sustenta los parámetros mínimos y esenciales para atribuirle a un sujeto esta medida coercitiva, que deriva del mínimo de 4 años a la sanción a imponer, es decir, si un sujeto es procesado por una pena inferior a los cuatro años, es inviable

y/o ineficaz la solicitud de prisión preventiva, por mandato legal.

En tercer lugar, encontramos al análisis minucioso que se debe realizar de los elementos volitivos del imputado, para tratar de prever la peligrosidad de fuga y el de obstaculización de la justicia.

Empero, pese a la existencia de estos márgenes de indispensable calificación para la imposición de la prisión preventiva, como media coercitiva de ultima ratio, se ha vuelto una frecuente práctica legal, la indebida aplicación de esta medida cautelar, sin tener en cuenta el respeto de las garantías que tiene el ciudadano debido a innumerables factores que se encuentran íntimamente relacionados con los parámetros constitucionales del debido proceso, que en esencia significa el respeto de las garantías, que todo ciudadano tiene, durante el desarrollo de un proceso.

Es indispensable señalar que, el debido proceso como parámetro de garantía procesal de rango constitucional, enmarca y engloba los derechos de la debida aplicación de la imparcialidad del magistrado, la motivación de la sentencia, la presunción de inocencia, el derecho a probar; asimismo, contiene los principios de legalidad, proporcionalidad de la pena, congruencia, favorabilidad, entre otros.

La problemática que se advierte en la existencia del incumplimiento de los parámetros del debido proceso dentro de la aplicación de las prisiones preventivas, en nuestro sistema jurídico, asimismo de la falta de argumentación necesaria entorno al cumplimiento de los requisitos que taxativamente el código procesal penal impone para la aplicación de la prisión preventiva; de igual forma se demuestra las indebidas solicitudes de los fiscales al no cumplir con los criterios normativos y procesales y por último, las terribles consecuencias penitenciarias y sociales que implicaría la desmedida aplicación de la prisión preventiva, que ya es pasible de innumerables Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ello, ha hecho que muchas organizaciones jurídicas y de derechos humanos no la respalden debido a su incompatibilidad con los derechos fundamentales del individuo de ir razonabilidad, imprevisibilidad y proporcionalidad; en atención a los datos estadísticos. Ello ha ocasionado el hacinamiento desmedido de la población penal en el Perú.

En el Perú, a diciembre de 2021, según cifras oficiales, la población penal total era 87,245 (100%); de ellas sólo 54,840 estaban sentenciados o con condenas consentidas (62.85%) y 32,405 (37.15%) no se encontraban en ninguna de estas dos condiciones. Se concluye que el 37.15% constituía la población penal con prisión preventiva, siendo ello la principal causa del hacinamiento penitenciario en el Perú.

Otra parte del problema, que tiene como una de las causas la prisión preventiva está relacionada con la aplicación de la vigilancia electrónica y su incidencia en la solución del hacinamiento penal en las cárceles peruanas, que es de carácter lamentable.

Ariza Higuera, considera que el problema del hacinamiento ha ocupado un lugar preponderante en estos debates y, por ello, la discusión sobre cómo establecer y medir el hacinamiento como indicador de la gravedad de la crisis carcelaria, es uno de los asuntos centrales del control y seguimiento de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad. En efecto, durante las últimas décadas, uno de los estándares más utilizados para medir la gravedad de la situación penitenciaria ha sido medir la capacidad oficial de alojamiento de los establecimientos para compararla con el número de personas privadas de la libertad. (Ariza Higuera 2019, p. 10).

Analizando la problemática del hacinamiento en América podemos decir que, de acuerdo a cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mencionadas en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 2705/2018-CR, Congreso (2018). En el 2017 el Perú ocupa el puesto 5 entre los países con mayores niveles de sobrepoblación en América, solo superados por Haití, el Salvador, Guatemala y Bolivia. El Perú contaba con 119% de sobrepoblación, Haití con 354.4 % (el más alto) y Canadá con 2.2 (El más bajo).

Al respecto, y en el caso peruano la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Susana Silva Hasembank, informó, ante el pleno del Tribunal Constitucional (TC), las acciones que el INPE viene realizando para disminuir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, en cumplimiento a la sentencia establecida en el expediente N.º 05436-2014-PHC/TC (Tribunal Constitucional 2020, p. 106).

La funcionaria señaló que, al 30 de abril del 2021, en los 69 penales a nivel nacional existe una capacidad de albergue de 41 211, sin embargo, la población penitenciaria asciende a un total de 86 825 personas, lo que trae como consecuencia un 111% de hacinamiento, afectando en mayor proporción a los penales de Lima que tienen una población penal de 41 651 internos/as y, solo, 17 695 unidades de albergue (Instituto Nacional Penitenciario 2021, p. s/n).

Sin embargo, se tiene que establecer las cifras estadísticas del hacinamiento penitenciario y sus tasas de sobre población a diciembre de 2021 que es el criterio temporal de la presente investigación.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadística Penitenciaria del INPE a diciembre de 2021 la población penal ascendía a la cifra de 87, 247 presos, pero sólo se tenía una capacidad de albergue para 41,123 internos. Ello arrojaba que la sobrepoblación era de 46,022 internos, es decir el 112% de la capacidad de albergue. (Instituto Nacional Penitenciario 2021, p. s/n)

El escenario antes descrito obliga a replantear o reformular el juez las medidas que debe tener en cuenta para garantizar la presencia del imputado en el proceso uno de ellos es la vigilancia electrónica.

La Vigilancia Electrónica que es un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados, dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que señalen estos. Un claro ejemplo de este sistema ese advierte en EE. UU.

En el Perú, desde el año 2010 se encuentra en vigencia la Ley 29499, Ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo núm. 635; modifica los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 638; y los artículos 50, 52, 55 y 56 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo núm. 654.

De otro lado, también se encuentra en vigencia desde el año 2017 el Decreto Legislativo N° 1322 de enero del año dos mil diecisiete, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal. Esta norma ha introducido diferentes modificaciones

a la legislación penal y ha derogado los artículos 1, 2, 3, 3-A, 8 y 9 de la Ley 29499, con el objeto de facilitar su aplicación.

Dado los permanentes marchas y contramarchas del Estado en esta materia desde el 2010 en que se dio la primera normativa sobre la vigilancia electrónica (Ley 29499) o también llamado los “grilletes electrónicos” se han realizado una serie de derogaciones y modificaciones sobre esta Ley porque no llegó a aplicarse hasta sus modificaciones a partir del 2017.

la evolución normativa de la vigilancia electrónica, en base al análisis de la normativa en el SPIJ, la podemos resumir de la siguiente manera:

Ley 29499, que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y modifica el artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo núm. 635; modifica los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 654. Fue publicada el 19-enero-2010. Crea por primera vez la vigilancia electrónica en el Perú, incorporándolo al Código Penal y al Código Procesal Penal. Puso como condición que el preso asuma los costos de la implementación de la VE.

El Decreto Legislativo 1322, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica persona Fue publicada 16-enero-2017 con el objetivo de elevar la pena a 8 años para que puedan beneficiarse el mayor número de presos. Derogándose los artículos 1, 2, 3, 3-A, 8, 9 y 10 de la Ley 29499 y sus modificatorias, Ley que establece la vigilancia electrónica personal.

D.S. 004-2017-JUS, El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1322, Fue publicado 9-marzo-2017, con el objetivo de establecer medidas para implementar el plan piloto D.S. 016-2017-JUS, donde aprueban los Protocolos Específicos de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal prevista en el Decreto Legislativo 1322), Fue publicado 22-julio 2017, con el objetivo de brindar Protocolos Específicos de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal.

D.S. 006-2018-JUS, con el que aprueban el Calendario Oficial para la Implementación Progresiva de la Vigilancia Electrónica Personal. El Decreto Supremo 006-2018-JUS fue publicado el 15-mayo-2018 con el objetivo de la implementación progresiva de la Vigilancia electrónica.

Decreto Legislativo 1514. Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento Fue publicada 04-junio-2020, con el objetivo de Derogar el inciso e) del Artículo 9 del D.-Leg. 1322, relativo a los costos que tiene que asumir el preso por la VEP. Dispone que el INPE financie los costos de aplicación de la VE. (Modif. Art. 14 del D.Leg. 1322).

D.S. 012-2020-JUS, dicho reglamento de aplicación de la medida de Vigilancia Electrónica Personal Fue publicada el 23-octubre- 2020, con el objetivo de reglamentar por segunda vez al Decreto Legislativo N°1322, que deroga al D.S. 004-2017-JUS

Decreto Legislativo 1513, es el Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19. Fue publicada el 4 -de junio -2020, con el objetivo de disminuir la población carcelaria vulnerable para evitar el contagio masivo de Covid-19 en los penales peruanos.

A raíz de la emisión de estos cambios legislativos el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial establece los requisitos que se deberían dar a para el uso de grilletes electrónicos en nuestro país.

De igual manera, la norma modificada establece que también se aplica para la prisión preventiva, dejando sin efecto su aplicación para la comparecencia restringida, en los siguientes términos:

Para el caso de personas procesadas, la vigilancia electrónica es una alternativa a la prisión preventiva o la variación de la misma, que se impone con la medida de comparecencia restrictiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 287-A del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957. Es dispuesta por el juez, de oficio, a pedido de parte o del Ministerio Público, a fin de garantizar su presencia y los fines del proceso.

Al respecto, se señala que “Decreto Legislativo 1514, que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento” a partir del 4 de junio de 2020 la financiación de los costos de equipo y mantenimiento que antes le

correspondía pagar al preso, pasaron a ser financiadas por el Estado a través del INPE, decisión que es bastante razonable ya que se observaba un tufillo discriminación si consideramos que muchos internos viven en la más completa miseria.

2.1.2 Antecedentes Teóricos

El problema de investigación se refiere a la aplicación intensiva y desmedida de la prisión preventiva que deciden los magistrados en el Perú y en otros países de América Latina, lo que origina un sobre poblamiento en las cárceles que ocasionan un hacinamiento que vulnera los derechos fundamentales de los reos en cárcel. Ello marca la terrible deformación de la prisión preventiva, en atención a la naturaleza primigenia, que conlleva una excesiva y desmedida aplicación de la misma. Tal es así que, se puede analizar como causa de la misma al desconocimiento del principio fundamental de “presunción de inocencia”; que se trasmite en el desconocimiento de los elementos fundamentales para establecer una adecuada relación jurídica procesal, en concordancia con los principios rectores que se circunscriben en el debido proceso. En consecuencia, la prisión preventiva se considera como una de las causas principales para las reformas penales en Sudamérica, lo que conocemos en nuestro medio como prisión preventiva, y que es considerado en esta región como una pena adelantada. En efecto, el sistema inquisitivo vigente anteriormente en el modelo sudamericano consideraba esta sanción adelantada como una grave afectación a los derechos humanos. Así, el carácter escrito y el exceso de formalismos ocasionaban que el imputado no tuviera una adecuada defensa.

La doctrina ha dejado en claro que el hacinamiento es un claro indicador de la gravedad de la crisis carcelaria, es uno de los asuntos centrales del control y seguimiento de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad. En efecto, durante las últimas décadas, uno de los estándares más utilizados para medir la gravedad de la situación penitenciaria ha sido medir la capacidad oficial de alojamiento de los establecimientos para compararla con el número de personas privadas de la libertad.

Una forma de luchar contra este problema es el de aplicación de la vigilancia

electrónica o los llamados grilletes electrónicos, cuya aplicación se ha iniciado en el Perú a partir del 2010 con la aprobación de la Ley 29499 y demás normas modificadoras y complementarias. La Investigación tiene por objetivo principal comprender de qué manera ha influido este sistema moderno de control y vigilancia penitenciaria en el deshacimiento de las cárceles peruanas.

La presente tesis se respalda en la Teoría sociológica de la prisión preventiva, porque describe y estudia un problema que afecta notoriamente a la sociedad peruana como es el hacinamiento provocado especialmente por la prisión preventiva, entre otros. social completa independencia, como de una mirada instrumentalista.

La investigación coincide con las principales conclusiones de los antecedentes académicos en el sentido que la prisión preventiva que al ser una medida excepcional y de última ratio, en la actualidad esta se viene aplicando en una forma excesiva y que colisiona con algunos principios y derechos como “el derecho a la libertad”, “la presunción de inocencia”, “el debido proceso”, entre otros, (Zapata 2019, p. 105); (Rojo y Yoli 2016, p.92); y (Amoretti, 2008, p. 135). Coinciden con tal apreciación importantes organismos de Derechos Humanos y de Justicia constitucional. (ComIDH, 2017, p. 81); (Defensoría del Pueblo 2018, p. 22) y (Tribunal Constitucional 2020, p. 106).

Respecto al problema del hacinamiento carcelario la investigación hace suya la conclusión de los antecedentes académicos de que una de las principales causas de esta situación es la prisión preventiva, seguida muy de cerca por las ausencias y deficiencias de la infraestructura carcelaria y que definitivamente ello acarrea una negación de la dignidad humana de los reos en este tipo de confinamientos; (Ariza, 2019, p. 16); (Magán, 2017, p. 7). Con relación a la aplicación de la vigilancia electrónica se coincide con la gran mayoría de autores en que este es un instrumento que podría aliviar en la disminución del deshacimiento penitenciario si es adecuadamente utilizado (Gonzales, 2020, p. 46). Se rebate la conclusión del antecedente académico realizado en la Universidad de Loja, Ecuador (Espinoza, 2018, p. 126), que considera que, durante el desarrollo del estudio se comprobó que, el dispositivo electrónico solo se enmarca en cumplir una sola función, el cual es evitar la fuga del procesado, pero que en ningún momento coadyuvará a que el infractor se

resocialice o evitar que vuelva a delinquir. Por tanto, los dispositivos electrónicos que han sido denominados como dispositivos opcionales a la prisión preventiva, se ha constituido en fracaso, dado que los sujetos que obtienen esta medida lo usan para volver a reincidir. Se considera que la conclusión es muy pesimista dado que la implementación de este sistema de vigilancia electrónica es de reciente data (2014) como en la mayoría de los países de América Latina y que según, este mismo autor su poca utilidad se debería a que los funcionarios responsables del sistema no están desarrollando bien su trabajo. Es decir, no es el sistema sino son las personas las que están fallando. De otro lado, existen también otros estudios en el mismo país anterior al que se analiza, que difieren de esta conclusión y consideran de mucha importancia su aplicación (Maldonado 2017, p. 26).

2.1.3 Definición del Problema

2.1.3.1 Problema General

¿De qué manera la vigilancia electrónica incide en el hacinamiento por prisión preventiva en el Perú?

2.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación

2.2.1 Finalidad

La presente investigación tiene por finalidad analizar y comprender las causas y efectos de la aplicación de la vigilancia electrónica frente al uso excesivo en las prisiones preventivas en lima metropolitana 2021

2.2.2 Objetivo general y específicos

2.2.2.1 Objetivos General

Establecer la incidencia de la vigilancia electrónica en el hacinamiento penitenciario producido por prisión preventiva en el Perú.

2.2.2.2 Objetivos Específicos

- a) Comprender la naturaleza jurídica de la Prisión Preventiva y su contraste con la Vigilancia electrónica.
- b) Identificar los derechos vulnerados de los procesados con prisión preventiva

c) Comparar el tratamiento de la vigilancia electrónica en el Perú y en el derecho comparado.

d) Analizar los resultados del Uso de la Vigilancia Electrónica en relación Con el hacinamiento penitenciario

2.2.3. Delimitación del estudio

2.2.3.1 Delimitación Temporal

La presente investigación se delimito al año 2021

2.2.3.2 Delimitación Espacial

La presente Investigación, se propuso como delimitación espacial todo el territorio nacional

2.2.3.3 Delimitación Social

La presente investigación, analizó una problemática social de actualidad y que afecta directamente la población penitenciaria., entiéndanse reos en cárcel con mandato de prisión preventiva a nivel nacional.

2.2.4 Justificación e importancia del estudio

2.2.4.1. Justificación teórica

La investigación analiza las principales teorías del Derecho Procesal Penal, así como de los derechos humanos que son afectados por esta problemática. Así como también, realiza un análisis teórico del derecho comparado.

2.2.4.2. Justificación práctica

La investigación analiza el grave problema que tiene la sociedad peruana debido a la mínima aplicación de la vigilancia electrónica y a la excesiva aplicación de la prisión preventiva, De igual forma, las evidentes vulneraciones al principio de presunción de inocencia y terribles consecuencias personales que subyacen de las subculturas existentes en los centros penitenciarios; encontrados en innumerables casos de prisión preventiva lo que agrava aún más el hacinamiento en los centros penitenciarios en el Perú.

2.2.4.3. Justificación metodológica

Porque genera una nueva fuente de investigación que proveyendo nuevos instrumentos con los cuales se tendrá información para el desarrollo de las variables y servirá de consulta para otros investigadores.

2.3 Hipótesis y Variables

2.3.1 Hipótesis o Supuestos categóricos

La prisión preventiva y el hacinamiento penal tienen una relación directamente proporcional, (a mayor prisión preventiva es mayor el hacinamiento penitenciario). De otro lado, la relación entre la vigilancia electrónica y el hacinamiento por prisión electrónica es inversamente proporcional, (es decir a mayor aplicación de la vigilancia electrónica será menor el hacinamiento por prisión preventiva). Por tanto, la aplicación mínima de la prisión preventiva no incide significativamente en el hacinamiento penitenciario por prisión preventiva.

2.3.1.1. Prisión Preventiva

En primer lugar, encontramos a la prisión preventiva, que atiende al análisis doctrinario de diferentes perspectivas jurídicas, tales como Diego Dei Vecchi, señaló que:

La prisión preventiva se basa en una distinción conceptual entre ella y la prisión como pena, distinción que constituye un presupuesto insoslayable del argumento que pretende mantener fuera del campo prohibitivo de la presunción de inocencia a la prisión preventiva, con dichos fundamentos. (Dei Vecchi, 2013, p. 13).

Tal es así que se puede comprender, la naturaleza teórica que brindaban a esta figura, debido a que no la consideraban como presupuesto que imperaba la presunción de inocencia, sino más bien como aquella figura que representa una excepción a la regla general, en atención a que para su aplicación es indispensable de la existencia de fundadas justificaciones, que, con el tiempo, el ordenamiento jurídico las cataloga de forma imperativas y categóricas.

En el Seminario sobre “Aportaciones Teóricas y técnicas Recientes en materia

penal” en la Universidad Nacional de la Pampa Argentina se debatió sobre la naturaleza de la Prisión preventiva si esta era una “pena adelantada” o era “una medida cautelar”, concluyéndose que no podría ser una pena porque ello contradecía al principio de “presunción de inocencia, optándose por lo relacionado a una medida cautelar. Es decir, se aplica para que el proceso siga su camino sin contratiempos ni irregularidades (Rojo y Yoli, 2016 p.10)

2.3.1.2. Peligro procesal

No muy lejanos a los argumentos esbozados líneas arriba, el peligro procesal también responde en atención a la aplicación de la prisión preventiva, puesto que, nuestro ordenamiento jurídico lo representa como un elemento de gran y suma relevancia para su aplicación; empero, sin perjuicio de ello, la doctrina también estableció supuestos donde se determine que es o en base a qué criterios se debería considerar la peligrosidad en el proceso. Tal es así que Ferrajoli, citado en A Moretti señala que:

la existencia de parámetros que demuestre la peligrosidad de un hecho en casos concretos responde caracteres únicamente subjetivos, por ende, de total antagonismo con los estándares propios del derecho; en atención a que la normativa establece presupuestos en atención a principios rectores, que deben ser salvaguardados ante cualquier apreciación subjetiva de la misma. (A Moretti M, 2008, p. 135).

Es así que, en esas mismas líneas se pueden encontrar diferentes perspectivas que a lo largo de la historia jurídica se fueron encontrando, en atención a la debida o indebida aplicación de la prisión preventiva.

2.3.1.3 Debido proceso

Asimismo, el debido proceso representa uno de los parámetros de mayor importancia dentro del derecho procesal; tal es así que el Tribunal Constitucional, en más de una oportunidad, señaló que el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.

De igual manera, el debido proceso responde a elementos tanto objetivos como subjetivos, en atención a doctrina anglosajona citada por Villavicencio, F (2019, p. 45) que señalaba que el debido proceso tiene su origen en el *due process of law* anglosajón, se descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales; sin perjuicio de que su incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia.

2.3.1.4 Derecho de defensa

Es así que se puede prever que en naturaleza y en atención a la doctrina mayoritaria se señala que el derecho a la defensa, conocido y reconocido en base a los principios constitucionales y legales, busca la defensa del bien jurídico afectado dentro de un proceso; con la finalidad de respetar el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Dota de protección jurídica a la persona, física y jurídica; dicho derecho se encuentra consagrado en leyes de rango constitucionales y supranacional, como la Declaración Humana de Derechos Humanos, la cual en su Art. 10 señala a letra

que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la defensa como derecho innato e inalienable del hombre, resaltando su vital relevancia e importancia dentro de cualquier proceso judicial.

2.3.1.5. Vigilancia electrónica y hacinamiento carcelario

Para María Rodríguez, distinguida autoridad en Derechos Humanos considera que el hacinamiento carcelario es un fenómeno multicausal y los diversos factores que contribuyen a su existencia tienen un efecto acumulativo, por lo que se requiere una estrategia multidisciplinaria e integral para hacerle frente de manera eficaz, a través de medidas de corto, mediano y largo plazos. El hacinamiento no se genera en el sistema penitenciario, sino que es el resultado de decisiones legislativas, de políticas de corte punitivo, de la presión social y la alarma pública. Es por ello que, las soluciones no podrán encontrarse exclusivamente en el sistema penitenciario, por tratarse éste solamente de un segmento del sistema penal. Asimismo, basándose en distinguidos maestros, entre ellos a Baratta, Zaffaroni, Bergalli, Rivera, exponentes de altísimo nivel académico, señala que la prisión ha demostrado históricamente ser ineficaz para resocializar, rehabilitar o readaptar a los infractores, y, por el contrario, ha mostrado su capacidad para degradar, criminalizar y estigmatizar a quienes encierra.

De igual manera es de la opinión que el uso desmedido y abusivo de la prisión preventiva también es causa fundamental del hacinamiento. La problemática de los presos y las presas sin condena continúa siendo un problema endémico en América Latina. Hay casos en que la detención preventiva excede la duración de la condena que probablemente se dicte y en muchos países las personas presas sin condena representan una proporción muy elevada, algunos países latinoamericanos superan el 60 por ciento (Rodríguez, 2015 pp. 24-32).

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene la determinación de las medidas alternativas: Ante el uso irracional de la prisión preventiva es necesario, implementar recursos opcionales para sustituir la detención preventiva, ya que viene siendo aplicada de forma frecuente, a pesar de que no se constata del todo si se cumplen los presupuestos para incorporar esta praxis que es de naturaleza excepcional. Por ello, la CIDH recomienda aplicar el uso de medidas alternativas en sustitución la medida coercitiva de prisión preventiva, por consiguiente, determina las siguientes medidas para garantizar la presencia del procesado, estas son: “vigilancia electrónica, retención de documentos, arresto domiciliario, obligación de presentarse cada cierto tiempo ante el operador jurídico o ante la autoridad que el designe, y otros”. Además, estos mecanismos contribuyen al hacinamiento penitenciario, reduciendo la sobrepoblación penitenciaria (CoDH 2017, p. 81).

De igual manera, de acuerdo al estudio realizado por la Defensoría del Pueblo esta confirma lo antes mencionado cuando expresa:

Las evidencias demuestran con absoluta claridad que no es posible combatir el hacinamiento mediante la construcción de más unidades de albergue (cárceles). Se requiere, en forma indispensable, de reales niveles de coordinación entre las entidades que conforman el sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) y los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Conviene tener presente, que en estos últimos descansa la responsabilidad por el excesivo aumento de penas, la eliminación progresiva de los beneficios penitenciarios y el reducido uso de medidas alternativas a la prisión, como la vigilancia electrónica personal, conversión de pena, entre otros. (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 22).

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el número de personas que estaban utilizando los grilletes electrónicos (Vigilancia electrónica personal) eran de 24, cantidad insignificante para la gran cantidad de presos en el Perú. (Minjus 2022, p. s/n)

2.2.4 Hipótesis

La prisión preventiva y el hacinamiento penal tienen una relación directamente proporcional, (a mayor prisión preventiva es mayor el hacinamiento penitenciario). De otro lado, la relación entre la vigilancia electrónica y el hacinamiento por prisión electrónica es

inversamente proporcional, (es decir a mayor aplicación de la vigilancia electrónica será menor el hacinamiento por prisión preventiva). Por tanto, la aplicación mínima de la vigilancia electrónica no incide significativamente en el hacinamiento penitenciario por prisión preventiva.

2.2.5 Variables e Indicadores

2.3.3.1 Variable Independiente

La Vigilancia Electrónica

2.3.3.2 Variable Dependiente

El Hacinamiento por Prisión Preventiva.

Tabla 2:

Matriz de operacionalización de variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	INDICADORES	ESCALA MEDICIÓN CUALITATIVA
V1. VIGILANCIA ELECTRÓNICA	La vigilancia electrónica es un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados, dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que señalen estos. Para el caso de personas procesadas, la vigilancia electrónica es una alternativa a la prisión preventiva. Según el Decreto Legislativo 1322, (SPIJ 2022).	Esta variable relacionada con el hacinamiento penal por prisión preventiva y se puede medir su influencia a través del número de presos que en el año 2021 lo estaban utilizando relacionándolo con el número de personas que estaban en intramuros en esa fecha.	- Magnitud del uso de la vigilancia electrónica en el año 2021.	- Numérica	Número de presos que están utilizando la vigilancia electrónica año 2021. Fuente INPE. -Gran importancia -mediana importancia, y -mínima importancia
			- Importancia del uso de la vigilancia electrónica en el Perú	- Grado de importancia expresada por los expertos.	
V2.: HACINAMIENTO	Conformada por dos subvariables: El HP es un fenómeno social que se da cuanto existe una sobrepoblación	La magnitud de la subvariable HP se puede establecer a través de estadísticas provenientes del INPE. Y la magnitud de		- - - Numérica	- Cantidad de presos relacionados con la capacidad de albergue de las cárceles

	<p>carcelaria, que sobrepasa la capacidad de albergue, lo que ocasiona una precariedad de vida que afecta los derechos humanos de la población carcelaria, (Magán, 2017; Vilca, 2020; Rubio 2020; Santillán Morales 2021). La PP. una medida coercitiva de última ratio que se aplica a los procesados con el fin de asegurar la presencia de estos en cada una de las etapas del juicio. Se considera que su exceso colisiona con principios constitucionales, entre ellos “la presunción de inocencia y el debido proceso” (Amoretti, 2008; Rojo y Yoli, 2016 y Zapata 2019).</p>	<p>su gravedad a través de las entrevistas a expertos. Respecto a la subvariable PP. Se puede establecer su magnitud a través de estadísticas provenientes del INPE. Y la magnitud de su gravedad a través de las entrevistas a expertos.</p>	- Hacinamiento penitenciario		<p>peruanas. Fuente INPE.</p> <p>-Prisión preventiva</p> <p>-Infraestructura</p> <p>-Carga judicial</p> <p>- Cantidad de presos intramuros que no tienen sentencia firme, incursos en prisión preventiva. Fuente INPE.</p> <p>-Adecuada</p> <p>-inadecuada.</p>
				- Causas principales del hacinamiento penal.	
			- Prisión preventiva	<p>- Numérica</p> <p>- Percepción de la prisión preventiva</p>	

CAPÍTULO III

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS

CAPÍTULO III

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS

3.1 Población y muestra.

3.1.1 La población

La población para el desarrollo de la presente tesis está comprendida por la totalidad de abogados penalistas de lima metropolitana, para ello según reporte del CALL la totalidad de abogados agremiados es $67,877 = 100\%$, de ellos el 12% eran penalistas (Gaceta jurídica, 2014, s/n), es decir 8,145 abogados, ello sería el universo.

3.1.2 Muestra

Aplicando la técnica de muestreo no probabilística por conveniencia, la muestra está comprendida por 12 abogados con especialidad en derecho penal, que se desempeñen como abogados defensores, fiscales o jueces penales ellos representan el 0.14%.

3.2 Diseño (s) a utilizar en el estudio

3.2.1. Tipo

Básica, porque recoger información y descriptiva. Al respecto Hernández y Baptista expresaron que este tipo de investigación básica tiene su fundamento especialmente en la conclusión sobre información empírica para alcanzar el desarrollo y diseño de una teoría. Considera que el investigador compara las informaciones que haya para obtener nuevas conclusiones (Hernández y Baptista 2018, p. 99).

3.2.2. Métodos

3.2.2.1. Generales

a) Método analítico

debido a que analizará resoluciones judiciales. Analizar significa la categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de datos para responder a las preguntas de investigación.

3.3.2.2. Métodos propios del derecho

a) Exegético

Método es el que obliga a una interpretación gramatical o literal de las disposiciones fiscales, de conformidad con lo que es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista el párrafo, la oración o frase que se aplica.

b) Hermenéutica

La hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión práctica. Lo que se quiere decir con comprensión práctica será más claro más adelante.

3.2.3. Diseño

El diseño de investigación es No experimental debido a que estudiará el fenómeno tal como está, sin alterar la realidad. Según Hernández et al. (2014), el diseño de la investigación es no experimental es la investigación que se lleva a cabo sin manipular de manera deliberada las variables; es decir, que no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, por lo que se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos (p,152).

3.2.4. Enfoque

El enfoque es cualitativo, de nivel descriptivo, porque no es numérica, está basada en la cualidad de un artículo u objeto y no se han creado datos para un análisis estadístico. Siguiendo a Soto este enfoque de investigación utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación (Soto 2016, p. 36)

3.1 Técnica (s) e instrumento (s) de Recolección de Datos

3.3.1. Técnicas

3.3.1.1. Técnica Análisis documental

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Sin embargo, según Kaufman y Rodríguez (1993, p.15), los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema. Es una operación que se realiza con una cadena de documentos y luego se analiza e interpreta.

3.3.2 Técnica de la Entrevista

Es el intercambio de ideas opiniones que se da en mediante una conversación entre dos o más personas en este caso se hará con abogados y fiscales en lima metropolitana. Al respecto, Mejía señala que esta técnica, debe entenderse como el “elemento que abastece de datos e información que se realiza mediante la solución de una gama de interrogantes estructuradas correctamente en un determinado texto, en el cual aquellos que participan dejan de forma clara y expresa cuál es su posición sobre las particularidades del problema analizado” (Mejía 2015, p. 94).

3.3.2. Instrumentos

3.3.2.1. Ficha bibliográfica

La ficha bibliográfica constituye una herramienta básica de investigación, su función principal es servir como base y sustento para anotar las fuentes que serán consultadas al momento de realizar un trabajo, estas pueden ser libros, guías, revistas, folletos, artículos científicos. Estos pueden ser realizados de manera tradicional por escrito en una ficha o de forma electrónica. También servirá como apoyo al momento de realizar la bibliografía al final de la investigación, ya que el mismo tendrá un resumen de los medios consultados durante la elaboración. (Del Moral, M. & Rodríguez, 2022, p. s/n).

3.3.2.2. Guía de Entrevista

Es un documento que contiene un protocolo que se seguirá durante las entrevistas. Con relación a este instrumento Soto sostiene que es un medio en el cual se perenniza los comentarios y opiniones recibidos de conformidad con las

respuestas que efectuaran los participantes, las mismas que deben ser de tipo abierto y que además fueron presentadas a través de un documento de índole evaluativo, que contiene información relacionada al problema identificado (Soto 2016, p. 95).

Entonces, en caso del presente trabajo, la guía de entrevista se encontrará conformada por nueve preguntas orientadas a una respuesta libre o abierta que recogerá la opinión o percepción del experto consultado. Las preguntas se realizaron con el fin de demostrar la relación que existe entre el uso de la vigilancia electrónica y su relación con el hacinamiento penitenciario, se ha aplicado entrevistas a doce abogados especialistas en derecho penal con la finalidad de evidenciar la necesidad de aplicar este nuevo mecanismo de la vigilancia electrónica, para tal efecto se presentarán, el capítulo referido a los resultados, los cuadros que sistematizan la información recogida en las entrevistas.

CAPITULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAPITULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Presentación de resultados

Del análisis del marco teórico, de los principales antecedentes de la investigación, de las principales jurisprudencias emitidas por los órganos judiciales y constitucionales; así como de los informes de las organizaciones de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, debidamente contrastado con los resultados de las entrevistas realizadas a abogados especializado en derecho penal, entre ellos, abogados defensores, y los que ejercen labores en el Poder Judicial y en la fiscalía que obran en las tablas 8, 9 y 10 se ha llegado a los siguientes resultados:

4.1.1 Naturaleza jurídica de la prisión preventiva

Respecto a la prisión preventiva, esta es conceptuada como una medida coercitiva de última ratio que se aplica a los procesados con el fin de asegurar la presencia de estos en cada una de las etapas del juicio. Es aplicada en casi todos los países de América. Algunos autores consideran que el exceso de esta medida colisiona con importantes principios constitucionales a favor del procesado, entre ellos al derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y el debido proceso (Amoretti 2008, p.135); Rojo y Yoli, 2016, p. 92) y Zapata 2019, p. 105).

Otras instituciones nacionales como internacionales consultadas han advertido que su uso excesivo constituye uno de los signos más evidentes del fracaso de los sistemas judiciales y se han pronunciado en contra de estas medidas ya que se considera la principal fuente del hacinamiento carcelario y afectan el principio constitucional de la “presunción de inocencia”, el “*indubio pro reo*” y otras garantías del debido proceso, (ComDH.2017, p. 81); (Defensoría del Pueblo 2018, p. 22) y (Tribunal Constitucional 2020, p. 106).

Dos corrientes teóricas se disputaron la concepción de la prisión preventiva: una la que consideraba que era un adelanto de la pena y la otra que

era una medida cautelar. De ellos la más aceptable fue la de naturaleza cautelaría que buscaba proteger el desarrollo normal del proceso con la presencia del imputado, que, con la actual vigencia del sistema acusatorio adversarial garantista, otorga a esta acción limitativa de la libertad una naturaleza excepcional y de “última ratio” a favor del imputado.

El autor coincide con esta concepción teórica de esta institución que le da naturaleza cautelar del proceso y no lo considera como un adelanto de sentencia ya que esta colisionaría con el principio de presunción de inocencia, establecida en nuestra vigente Constitución Política.

4.1.2 Los derechos vulnerados de los procesados con prisión preventiva

Se ha identificado que los derechos vulnerados de los procesados con prisión preventiva son los siguientes:

El derecho a la libertad es un derecho fundamental en el Perú y en casi todos los países democráticos. La Carta Magna de 1993 ha establecido “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito (...)” (literal f, inc 24, Art 2º Constitución P.). De igual manera, afecta los principios relativos a la presunción de inocencia, “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (literal e, inciso 24, art. 2º Constitución P.) y el debido proceso. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional” (Inciso 3, del art. 139º Constitución P.). Además, de muchos derechos de carácter legal y reglamentario de materia penal

4.1.2 Tratamiento de la vigilancia electrónica en el Perú y en el derecho comparado

Se ha confirmado que el uso de la Vigilancia Electrónica en el Perú en relación con el hacinamiento penitenciario por prisión preventiva es casi nulo si observamos que a diciembre de 2021 sólo 24 presos hacían uso de este beneficio. Si lo comparamos con la población presa pero que aún no recibían sentencia que

era de 32,405, constituye el 0.074%. Lo que confirma que el impacto de la vigilancia electrónica es casi nulo en el des hacinamiento de las cárceles en el Perú.

En el caso del derecho comparado es importante el proceso que se realiza principalmente en países de la región latinoamericana como Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Ecuador en la que la implementación de la vigilancia electrónica empieza en su mayoría, en el 2014. Son emblemáticos los procesos realizados en Chile que en el 2015 se han realizado 5290 instalaciones, de los cuales 823 se realizaron el año 2014. En el caso de Colombia, el uso de los grilletes electrónicos está permitiendo reducir los niveles de hacinamiento y se emplea como un beneficio penitenciario, que no aplica a casos graves

4.1.3 El Uso de la Vigilancia Electrónica en relación con el hacinamiento penitenciario

La vigilancia electrónica, también conocida como “grilletes electrónicos” son mecanismos alternativos a la prisión física o encarcelamiento, es decir son mecanismos de control que tienen como fin monitorear el tránsito de los procesados y condenados dentro de un determinado radio de acción. La normativa al respecto data desde el 2010 con la ley 29499, Ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y modifica el artículo 52 del Código Penal, modificada por el Decreto Legislativo 1322 Ley que regula la vigilancia electrónica personal del año 2017 y finalmente modificada por el Decreto Legislativo 1514 que optimiza la aplicación de la vigilancia electrónica personal. Sin embargo, al año 2021, el número de presos beneficiados con estas normas apenas alcanzaban a 24.

De acuerdo a la Tabla de Sistematización de información recopilada, la mayoría de los especialistas entrevistados consideran que la vigilancia electrónica es positiva porque va a permitir la disminución del hacinamiento penitenciario y va a colaborar con la resocialización del interno, que para muchos jamás se conseguirá en los centros penitenciarios; coinciden con esta percepción otros investigadores (Maldonado 2017 y Salcedo, 2020). Ya destacados académicos como Baratta, Zaffaroni, Bergalli, y Rivera, exponentes de altísimo nivel

académico, señala que la prisión ha demostrado históricamente ser ineficaz para resocializar, rehabilitar o readaptar a los infractores (Noel Rodríguez, 2015, p. 24-32). De igual manera, La Comisión de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Gobierno tomar medidas urgentes para deshacinar los centros penitenciarios, especialmente utilizando la vigilancia electrónica (ComDH, 2017, p. 81) y (Defensoría del Pueblo 2018, p. 22).

Sin embargo, otros autores, (en el caso de un investigador ecuatoriano, universidad de Loja) no se encuentran convencidos de que la aplicación de la vigilancia electrónica incida positivamente en su readaptación y también eviten su reincidencia en el delito (Espinoza Poma, 2018, p. 126).

En el caso peruano, el 58.3% de los entrevistados (Tabla) considera de gran importancia la aplicación de la Vigilancia electrónica y que ayudará en forma importante en disminuir la excesiva población penitenciaria tal como se ha observado en otros países de América. Sin embargo, el 33.3% de los entrevistados lo considera de mediana importancia. Sin embargo, un entrevistado que representa el 8.4% lo considera de mínima importancia porque la realidad demuestra que sólo son 24 personas que lo están utilizando de una población 32,405 que se considera como prisión preventiva. Además, considera este entrevistado, que otra causa sería los altos costos de los equipos y su mantenimiento a cargo de los presos. Sin embargo, se aclara que a partir del Decreto Legislativo 1514 del año 2020, el INPE asume los gastos antes mencionados.

De las entrevistas semiestructuradas realizadas a los especialistas surgieron subcategorías emergentes que explicaban también el problema de investigación. Estas fueron: La infraestructura penitenciaria y el incremento de delincuentes extranjeros.

A fin de desarrollar el presente acápite se ha aplicado entrevistas, conforme se detalla a continuación:

Tabla 3:

Categoría: Abogados especialista en derecho penal: ¿Considera adecuada la prisión preventiva que se aplica en el Perú actual?

Pregunta 2.- ¿Por qué?

Especialista 1	Especialista 2	Especialista 3	Especialista 4	Especialista 5	Especialista 6
Inadecuada	Adecuada	Inadecuada	inadecuada	Adecuada	Inadecuada
Porque se está abusando de esta medida y que afecta a los derechos humanos. Por ello el TC se ha pronunciado en contra.	Porque permite que muchos delincuentes no tengan la libertad de acción para seguir cometiendo más delitos mientras se les juzga. La sociedad se tiene que proteger	Porque lo fiscales solicitan esta prisión, pero sin que debidamente justificada y muchos jueces no se quieren hacer problemas y acceden a ello. Existe un abuso de autoridad.	Porque hay un exceso de pedidos de esta medida por parte de los fiscales. "Todo lo ven prisión preventiva". Por eso se les llama "fiscales carceleros".	Porque la sociedad tiene que defenderse ante tanta ola de delincuencia que se ha incrementado últimamente. Y ello se ha incrementado con la migración venezolana, que ya pasa del millón, la mayoría de ellos indocumentados.	Existe un abuso de autoridad y ello no puede ser permitido por un Estado de derecho y de respeto de los derechos humanos.
Especialista 7	Especialista 8	Especialista 9	Especialista 10	Especialista 11	Especialista 12
Inadecuada	Adecuada	Inadecuada	inadecuada	Adecuada	Inadecuada
Porque son medidas que en vez de ser excepcionales son genéricas. Además, generan un grave hacinamiento carcelario que colisiona con los derechos humanos de los presos.	La sociedad tiene que defenderse ante tanto incremento de la delincuencia en estos últimos tiempos, especialmente la delincuencia organizada y la proveniente de las migraciones extranjeras, especialmente la venezolana y colombiana.	Por qué se está aplicando en exceso, por "quítame esta paja" por parte de la fiscalía y del Poder judicial. Colisiona con el principio de "la presunción de inocencia".	De aplicación arbitraria y sin ningún criterio. En vez de ser una excepción es una regla general. Es un abuso del derecho.	Porque, lamentablemente no se puede tener delincuentes libres cuando son procesados. Lamentablemente en el Perú las sentencias demoran muchos años.	Excesiva su aplicación por parte de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial. Afecta los principios constitucionales y penales.
Coincidencia Los especialistas 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 12 considera a la prisión preventiva como inadecuada, es decir son desfavorables a ellas. Un 66.7%.					
Discrepancia Los especialistas 2, 5, 8 y 11 consideran a la prisión preventiva como adecuadas, es decir son favorables a ellas. Es decir, un 33.3%.					
Interpretación La mayoría de los especialistas de esta tabla 66.7 % tienen opinión desfavorable sobre la prisión preventiva, especialmente porque esta se está aplicando indiscriminadamente y porque afecta a los derechos humanos. Ello coincide con la doctrina expuesta en el presente trabajo. Debemos tomar en cuenta, también, que son abogados defensores y los directos afectados con esta institución son sus patrocinados. Los que están a favor de la prisión preventiva un 33.3 % consideran que es necesario para controlar el alto índice de criminalidad de los últimos tiempos, agravada con la irrefrenable ola de migración de población venezolana. Se consideran como subcategoría emergente a la delincuencia extranjera imperante en el Perú.					

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.

4.1.5 El hacinamiento carcelario como causa de la prisión preventiva

El hacinamiento es conceptualizado por muchos especialistas como un fenómeno social que se da cuanto existe una sobrepoblación carcelaria, que sobrepasa la infraestructura o capacidad de albergue, lo que ocasiona una precariedad de vida que afecta los derechos humanos de la población carcelaria, (Magán, 2017, p. 7)); (Vilca, 2020, p. s/n) y (Santillán Morales 2021, p. 23). Ellos coinciden que la principal causa del hacinamiento carcelario es la excesiva aplicación de la prisión preventiva y en segundo lugar la escasa infraestructura carcelaria.

El hacinamiento penal tanto en América como en el Perú se constituye en uno de los principales problemas que afecta los derechos humanos de la población penal. De acuerdo a cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mencionadas en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 2705/2018-CR, Congreso (2018, p. 21). En el 2017 el Perú ocupa el puesto 5 entre los países con mayores niveles de sobrepoblación en América, solo superados por Haití, el Salvador, Guatemala y Bolivia. El Perú contaba con 119% de sobrepoblación, Haití con 354.4 % (el más alto) y Canadá con 2.2% (El más bajo).

La disminución del porcentaje de sobrepoblación en el Perú comparado con el del año 2017 se debió a la política de deshacinamiento de las cárceles como una forma de la lucha contra la pandemia del Covi 19 entre los años 2020 y 2021 facultada normativamente por el Decreto Legislativo 1513 que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19. (SPIJ, 2022, p. s/n).

A diciembre de 2021, de acuerdo con informaciones del INPE la sobrepoblación de las cárceles peruanas alcanzó un 112%, es decir 46,122 presos sobre una capacidad de albergue de 41,123. (INPE 2021, p. s/n).

La prisión preventiva como principal causa del hacinamiento carcelario peruano ha sido corroborado con las entrevistas realizadas (Tabla 9) que ratifica lo antes mencionado con lo respondido por el 58.3% de los entrevistados. Los demás entrevistados consideran como causa principal la excesiva carga procesal y en otros, el incremento extraordinario de la delincuencia y la ineficiente infraestructura penal.

Tabla: 4

Pregunta: En su opinión ¿la prisión preventiva sería una de las causas que originan el hacinamiento penal en el Perú? ¿Por qué? Categoría: Abogados especialista en derecho penal

Especialista 1	Especialista 2	Especialista 3	Especialista 4	Especialista 5	Especialista 6
De acuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	De acuerdo
Porque como se ha dicho la fiscalía se está excediendo en la aplicación de esta institución. Debido a la carga procesal de los juzgados que hacen lentas sus sentencias finales.	Porque considera a la lentitud de los procesos judiciales debido a la carga judicial que sigue colapsando el sistema jurídico en el país. La prisión preventiva también sería una causa, pero de menos importancia.	Porque hay una aplicación excesiva de la prisión preventiva tanto de los fiscales como de los jueces. De igual manera por la lentitud de los juzgamientos.	Porque hay un abuso de estas medidas por parte de los fiscales sin cumplir con los requisitos establecidos.	Porque se ha incrementado la delincuencia extranjera principalmente por la migración venezolana. Se debe incrementar más las cárceles porque no se puede permitir que la delincuencia tenga libertad de acción.	Porque todas las medidas de prisión incrementan necesariamente el hacinamiento y peor aún si se está abusando de estos pedidos.
Especialista 7	Especialista 8	Especialista 9	Especialista 10	Especialista 11	Especialista 12
De acuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	De acuerdo
Porque son medidas discriminatorias y que atentan contra el principio de la "presunción de inocencia".	La principal causa es el incremento imprevisto de la delincuencia que colisiona con una pobre infraestructura penitenciaria, por ello se debe poner en práctica una eficiente política de infraestructura carcelaria.	Porque considero que la principal causa es la excesiva carga procesal que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ello explica que existan muchos presos que no están sentenciados.	Porque hay un exceso de aplicación de esta prisión preventiva. En vez de ser una excepción se ha convertido en una regla general. Ya se ha pronunciado en este sentido la Defensoría del Pueblo y el TC.	Porque considero que la principal causa es la deficiencia de la infraestructura carcelaria. Pocas cárceles para muchos delincuentes.	Porque el exceso de aplicación de la prisión preventiva hace que se tугuricen las cárceles y los presos pierdan su dignidad y sus derechos humanos.
Coincidencia Los especialistas 1, 3, 4, 6, 7, 10 y 12 coinciden en que están de acuerdo que la prisión preventiva es la causa principal del hacinamiento carcelario y representan el 58.3% de la muestra.					
Discrepancia Cinco especialistas el 2, 5, 8, 9 y 11, que representa el 41.7%, discrepa de la mayoría y considera que la principal causa es la falta de infraestructura carcelaria y el incremento de la delincuencia por la migración extranjera antes que la prisión preventiva.					
Interpretación Un mayor porcentaje de los especialistas (58.3%) consideran que la prisión preventiva, por su aplicación excesiva por parte de los fiscales y jueces son la principal causa del hacinamiento carcelario en el Perú. Colabora con ello la excesiva duración de los procesos judiciales por la excesiva carga judicial. Los que están en desacuerdo corresponde al 41.7% que no considera a la prisión preventiva como la causa principal del hacinamiento carcelario y considera que la principal causa es el incremento delincencial, la larga duración de los procesos judiciales debido a la carga procesal y que ocasionan que existan muchos reos en cárcel, pero sin sentencia y infraestructura carcelaria insuficiente. Una subcategoría emergente fue el incremento de delincuentes extranjeros, especialmente originados por la migración venezolana.					

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.

Tabla 5

Categoría: Abogados especialista en derecho penal

Pregunta: En su opinión ¿Considera que el Decreto Legislativo 1322 de vigilancia electrónica (Grilletes) podría ser de (gran importancia) (Mediana Importancia) (Mínima importancia) en la solución del hacinamiento penal por prisión preventiva en el Perú? ¿Por qué?

Especialista 1	Especialista 2	Especialista 3	Especialista 4	Especialista 5	Especialista 6
Mediana importancia	Gran importancia	Mediana importancia	Gran importancia	Gran importancia	Mínima importancia
Porque no se observa una intensa aplicación, debido al costo que significa. Sólo se ha beneficiado a 24 reos.	Porque los presos cumplirían sus sanciones penales en sus domicilios y des tugurizarían los penales y los costos de mantenimiento de reos en cárcel desaparecerían. Los costos de tecnología electrónica serían menores.	Porque se requiere modificar la norma especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad del costo que le corresponde al procesado. Debería ser compartido con el Estado.	Porque si es una aplicación bien estudiada y planificada ayudaría en forma importante a destugurizar las prisiones y mejorará los derechos humanos de los internos.	Definitivamente sería una buena decisión para la lucha contra el hacinamiento carcelario, ya que permitirá la resocialización desde el núcleo familiar. Se viene aplicando en otros países en forma exitosa.	Porque la norma es discriminatoria por los costos que tiene que afrontar los reos. El Estado debe compartir estos costos. Sólo, lo utilizarían los reos con recursos económicos.
Especialista 7	Especialista 8	Especialista 9	Especialista 10	Especialista 11	Especialista 12
Mediana importancia	Gran importancia	Gran importancia	Mediana importancia	Gran importancia	Gran importancia
Porque las normas están desde el año 2010 y a la fecha su utilización es mínima. No pasan de 30 de una población de mas de 80,000 personas. Se debe incentivar su uso.	Porque es de gran aplicación en América latina, en Brasil, Colombia, Ecuador, etc. Para el Estado le resultaría más barato que mantener a los presos en las cárceles.	Porque el INPE ahorraría dinero ya que la tecnología es más barata y lograría mejorarse los derechos humanos de los presos.	Se tiene que hacer mejoras en las normas porque las actuales no incentivan su uso. Pocos presos lo vienen utilizando.	Es un avance en el tratamiento carcelario que está en boga en todo el mundo y además ahorraría dinero al Estado.	Porque todas las prisiones preventivas se realizarán a través de los grilletes electrónicos y se protegerían sus derechos humanos.
Coincidencia Los especialistas 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 (7) consideran que los grilletes electrónicos serían de gran importancia en la solución del Hacinamiento penal, lo que representa un 58.3% y los especialistas 1,3,7 y 10 (4), que representa el 33.3% lo consideran de mediana importancia.					
Discrepancia Un especialistas el 6 considera que la aplicación de grilletes electrónicos serían de mínima importancia en la solución del hacinamiento penal por prisión preventiva, lo que representa el 8.4%.					
Interpretación Los datos recogidos indica que el 91.4% de lo especialistas entrevistado considera aceptable importancia (Grande y mediana) la aplicación de los grilletes electrónicos en la solución del hacinamiento penal por prisión preventiva y se basan principalmente en que el sistema disminuirá los costos de encarcelamiento y mejorará los DDHH. De los presos y porque se viene aplicando exitosamente en otros países. Sin embargo, el 8.4% responden que el aporte a la solución del hacinamiento sería de mínima importancia, porque que la norma tiene visos discriminatorios (costos a cargo del reo) y proponen su modificación para ser compartido con el Estado. Al respecto se debe advertir que, a partir del 2020, (Decreto Legislativo 1514) el financiamiento de los grilletes corresponde al INPE (Estado).					

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas

4.2. Contrastación de Hipótesis/Supuestos categóricos

En la presente investigación de enfoque cualitativo se ha formulado la siguiente hipótesis o supuesto categórico la vigilancia electrónica no está disminuyendo significativamente el hacinamiento penitenciario por prisión preventiva en las cárceles peruanas en el 2021. Del análisis del marco normativo, de las cifras estadísticas recopiladas y del resultado de las entrevistas se ha confirmado el supuesto categórico de que a la fecha la vigilancia electrónica no ha sido un importante aporte en la disminución del hacinamiento penitenciario por prisión preventiva.

Con respecto a los objetivos de la presente investigación se debe tener en cuenta que:

a) Se ha comprendido la naturaleza jurídica de la Prisión Preventiva como una decisión judicial de carácter excepcional y de última ratio ya que afectaría numerosos derechos fundamentales de la persona como es el caso del principio de la “presunción de inocencia” y del “debido proceso” ya que estaríamos, en la práctica, como un adelanto de condena. Dos corrientes se disputaron la concepción de la prisión preventiva: una la que consideraba que era un adelanto de la pena y la otra que era una medida cautelar. De ellos la más aceptable fue la de naturaleza cautelaría que buscaba proteger el desarrollo normal del proceso con la presencia del imputado,

b) Se ha identificado que los derechos vulnerados de los procesados con prisión preventiva son los siguientes:

El derecho a la libertad es un derecho fundamental en el Perú y en casi todos los países democráticos. La Carta Magna de 1993 ha establecido “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito (...)” (literal f, inc 24, Art 2º Constitución P.). De igual manera, afecta los principios relativos a la presunción de inocencia, “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (literal e, inciso 24, art. 2º Constitución P.) y el debido proceso. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”

(Inciso 3, del art. 139° Constitución P.). Además, de muchos derechos de carácter legal y reglamentario de materia penal.

c) Se ha corroborado que la vigilancia electrónica son mecanismos alternativos a la prisión física o encarcelamiento, tienen por finalidad vigilar, controlar y monitorear el desenvolvimiento de los reos en libertad, dentro de un radio de acción, sin necesidad que se preste custodia policial. Se ha comenzado a regular en el Perú a partir del 2010 pero en forma inefectiva con la Ley 29499 y posteriormente con el Decreto legislativo 1322 en el 2017 y el Decreto Legislativo 1514 en el 2020. A diciembre del 2021 se ha observado que sólo 24 reos lo han utilizado.

Una de las principales causas de su no aplicación es el costo del equipo y de su mantenimiento que se calculaba en S/. 750.00 mensual por preso, que desde el año 2010 al 2020 correspondía pagar a los reos. Ante ello el Decreto legislativo 1514 ha dispuesto que el financiamiento de la compra y mantenimiento de los grilletes electrónicos corresponda al Instituto Nacional Penitenciario.

De acuerdo al análisis costo beneficio realizada en el Congreso durante el estudio del Proyecto de Ley 2705/2017-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1322 que regula la vigilancia electrónica, el costo mensual del equipo electrónica asciende a S/. 837, si lo asumía el preso y si lo asume el INPE sería de S/: 63.00., tal como se detalla en la tabla siguiente:

Tabla: 6*Costos diario y mensual de la vigilancia electrónica*

COSTO EN SOLES POR PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD Y POR BENEFICIARIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL				
	PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD	VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL	AHORRO PARA EL INPE POR VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL	
			SI BENEFICIARIO ASUME COSTO	SI EL INPE ASUME COSTO
DIARIO	27.9	25.8	27.9	2.1
MENSUAL	837	774	837	63.0
ANUAL	9417	101983.5	10193.5	766.5

Fuente: Congreso de la República, Proyecto de Ley 2705/2017-CR. (p.20)

d) Se ha confirmado que el uso de la Vigilancia Electrónica en el Perú en relación con el hacinamiento penitenciario por prisión preventiva es casi nulo si observamos que a diciembre de 2021 sólo 24 presos hacían uso de este beneficio. Si lo comparamos con la población presa pero que aún no recibían sentencia que era de 32,405, constituye el 0.074%. Lo que confirma que el impacto de la vigilancia electrónica es casi nulo en el des hacinamiento de las cárceles en el Perú.

En el caso del derecho comparado es importante el proceso que se realiza principalmente en países de la región latinoamericana como Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Ecuador en la que la implementación de la vigilancia electrónica empieza en su mayoría, en el 2014. Son emblemáticos los procesos realizados en Chile que en el 2015 se han realizado 5290 instalaciones, de los cuales 823 se realizaron el año 2014. En el caso de Colombia, el uso de los grilletes electrónicos está permitiendo reducir los niveles de hacinamiento y se emplea como un beneficio penitenciario, que no aplica a casos graves.

4.3. Discusión de resultados

Siendo esta una investigación de enfoque cualitativo dentro del paradigma interpretativo, es decir su recolección de datos no requirió de medición numérica y estuvo más enfocado en recopilación de antecedentes académicos tanto nacional como internacional; modelos y teorías que explican los fenómenos jurídicos sociales, así como opiniones y puntos de vista de especialistas como abogados defensores, jueces y fiscales, a través de entrevistas no estructuradas. Al respecto se expresa lo siguiente:

Esta investigación se respalda en la Teoría sociológica (Kostenwein, 2010, p. 10) de la prisión preventiva, porque describe y estudia un problema que afecta notoriamente a la sociedad peruana como es el hacinamiento provocado especialmente por la prisión preventiva, entre otros, que además de ser un hecho jurídico, no deja de ser un hecho social.

La investigación ha demostrado que la prisión preventiva es la regla para una gran mayoría de jueces y fiscales, y no una excepción o de “ultima ratio” como debería ser tratada, situación que evidencia la afectación de los derechos fundamentales del procesado, pues a diciembre de 2021 era 32,405 (37.15%) de los internos no estaban sentenciados o no contaban con sentencia firme y/o consentida, todo esto guarda relación y colisiona con la teoría de los fines de la pena y con la teoría de los derechos fundamentales de la persona.

La investigación coincide con las principales conclusiones de los antecedentes académicos en el sentido que la prisión preventiva que al ser una medida excepcional y de última ratio, en la actualidad esta se viene aplicando en una forma excesiva y que colisiona con algunos principios y derechos como “el derecho a la libertad”, “la presunción de inocencia”, “el debido proceso”, entre otros, (Zapata 2019, p. 105); (Rojo y Yoli 2016, p.92); y (Amoretti, 2008, p. 135). Coinciden con tal apreciación importantes organismos de Derechos Humanos y de Justicia constitucional. (ComIDH, 2017, p. 81); (Defensoría del Pueblo 2018, p. 22) y (Tribunal Constitucional 2020, p. 106).

Respecto al problema del hacinamiento carcelario la investigación hace suya la conclusión de los antecedentes académicos de que una de las principales causas de esta situación es la prisión preventiva, seguida muy de cerca por las ausencias y deficiencias de la infraestructura carcelaria y que definitivamente ello acarrea una negación de la dignidad humana de los reos en este tipo de confinamientos; (Ariza, 2019, p. 16); (Magán, 2017, p. 7); coincidiendo con ellos igualmente importantes instituciones de Derechos Humanos y de justicia constitucional ((ComIDH, 2017, p. 81); (Tribunal Constitucional 2020, p. 106) y (Defensoría del Pueblo 2020 p. 22).

Con relación a la aplicación de la vigilancia electrónica se coincide con la gran mayoría de autores en que este es un instrumento que podría aliviar en la disminución del deshacinamiento penitenciario si es adecuadamente utilizado (Gonzales, 2020, p. 46). De igual manera, La Comisión de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo han recomendado al Gobierno tomar medidas urgentes para deshacinar los centros penitenciarios, especialmente utilizando la vigilancia electrónica (ComDH, 2017, p. 81) y (Defensoría del Pueblo 2018, p. 22).

No se coincide con un antecedente académico realizado en la Universidad de Loja, Ecuador (Espinoza, 2018, p. 126), que considera que, durante el desarrollo del estudio se comprobó que, el dispositivo electrónico solo se enmarca en cumplir una sola función, el cual es evitar la fuga del procesado, pero que en ningún momento coadyuvará a que el infractor se resocialice o evitar que vuelva a delinquir. Por tanto, los dispositivos electrónicos que han sido denominados como dispositivos opcionales a la prisión preventiva, se ha constituido en fracaso, dado que los sujetos que obtienen esta medida, lo usan para volver a reincidir. Se considera que la conclusión es muy pesimista dado que la implementación de este sistema de vigilancia electrónica es de reciente data (2014) como en la mayoría de países de América Latina y que según, este mismo autor su poca utilidad se debería a que los funcionarios responsables del sistema no están desarrollando bien su trabajo. Es decir, no es el sistema sino son las personas las que están fallando. De otro lado, existen también otros estudios en el mismo país anterior al que se analiza, que difieren de esta conclusión y consideran de mucha importancia su aplicación (Maldonado 2017, p. 26).

Se coincide plenamente con la Defensoría del Pueblo en el sentido que las evidencias demuestran con absoluta claridad que no es posible combatir el hacinamiento mediante la construcción de más unidades de albergue (cárceles). Se requiere, en forma indispensable, de reales niveles de coordinación entre las entidades que conforman el sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) y los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Conviene tener presente, que en estos últimos descansa la responsabilidad por el excesivo aumento de penas, la eliminación progresiva de los beneficios penitenciarios y el reducido uso de medidas alternativas a la prisión, como la vigilancia electrónica personal, conversión de pena, entre otros. (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 22).

Lamentablemente, el incremento de delitos, en especial los de menor gravedad que no requieren prisión según la normatividad actual, hacen que la sociedad y los medios de comunicación presionen al Poder Ejecutivo y al Poder legislativo para que modifiquen las normas penales incrementando las penas de prisión efectiva y los requisitos para los beneficios penitenciarios; eso obviamente va en contra de un saludable deshacinamiento carcelario.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Al término de la presente investigación se llega a las siguientes conclusiones:

- a) La naturaleza jurídica de la prisión preventiva es de carácter precautelatorio y tiene por finalidad de que el proceso judicial se realice sin irregularidades, para lo cual utiliza las sanciones temporales, incrementando el hacinamiento penal. En contraste la vigilancia electrónica, tiene una naturaleza diferente o contraria pues busca el deshacinamiento penal a través de la utilización de equipos electrónicos para el control y monitoreo de las personas que antes se encontraban en prisión efectiva o con posible sanción de esta naturaleza.
- b) Los derechos fundamentales vulnerados de los sometidos a la prisión preventiva son principalmente los establecidos por normas de rango constitucional, entre ellos tenemos: “El derecho a la libertad” (Literal f) inc.24, Art.2° Constitución P); “la presunción de inocencia” (literal e, inciso 24, art. 2° Constitución P.) y el “debido proceso”.(Inciso 3, del art. 139° Constitución P.). De ellos se desprenden numerosas norma legales y reglamentarias de naturaleza penal a favor del reo.
- c) En el derecho comparado del 2021 respecto a la utilización de la vigilancia electrónica en la Región Latinoamericana, el Perú se encontraba en una situación precaria de mínima aplicación. (sólo 24 de 32,405 que se encontraban con prisión preventiva lo utilizaban y constituía un 0.074%); en cambio es importante mencionar los casos de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Ecuador en la que la implementación de la vigilancia electrónica empieza en su mayoría, en el 2014. Es emblemático el proceso realizado en Chile que en el 2015 se han realizado 5290 instalaciones, de los cuales 823 se realizaron el año 2014.
- d) Los especialistas entrevistados como abogados defensores, fiscales y jueces, en su mayoría consideran positivo la aplicación de la vigilancia

electrónica, no sólo porque acarrea disminución de costos al Estado (Los costos de los equipos electrónicos y su mantenimiento son menores a los costos de alojamiento, salud, alimentación, etc. de los internos) sino porque permiten dignificar a la persona humana resocializándose a través de la vida familiar y el trabajo, situación que es imposible conseguirlos en las cárceles peruanas.

- e) Finalmente, se ha demostrado que la prisión preventiva y el hacinamiento penal tienen una relación directamente proporcional es decir a mayor prisión preventiva es mayor el hacinamiento penal por prisión preventiva. De otro lado, la relación entre la vigilancia electrónica y el hacinamiento por prisión preventiva es inversamente proporcional, es decir a mayor aplicación de la vigilancia electrónica será menor el hacinamiento por prisión preventiva. Lamentablemente, por la mínima aplicación de la vigilancia electrónica en la actualidad la incidencia en el hacinamiento por prisión preventiva es imperceptible.

5.2 Recomendaciones

Al término de la presente investigación se dan las siguientes recomendaciones:

- a) Se debe dar un gran impulso a la capacitación de jueces y fiscales respecto a la naturaleza cautelar de la prisión preventiva a favor de un proceso penal sin irregularidades y dejar sin efecto, la concepción de que este sólo es un adelanto de condena y que la dignidad de la persona humana está por encima de los objetivos sancionatorios.
- b) De igual manera, la capacitación a jueces y fiscales deben estar referidos a cautelar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y también a los derechos humanos, establecidos no sólo en la carta fundamental sino en los tratados internacionales. Con ello, se evitará la aplicación excesiva de la prisión preventiva y el consiguiente hacinamiento penal en las cárceles peruanas.
- c) Se debe incentivar la aplicación de medidas alternativas de prisión, especialmente la vigilancia electrónica, dado que a la fecha de la investigación era prácticamente nula si lo relacionamos con la población penal existente y con los avances en esta materia de los países de la región. Se ha dado un importante avance con el Decreto legislativo 1514, que traslada los costos de los equipos y mantenimiento de los grilletes electrónicos al Estado, pero ello no es suficiente, para lo cual se debe promover su uso a la población penal y a sus abogados.
- d) Finalmente, el esfuerzo por incrementar el uso de la vigilancia electrónica para disminuir el hacinamiento de la población penal por prisión preventiva, es de responsabilidad plural, es decir, de los internos, de los abogados, de los jueces, del Estado y de la sociedad en general, por lo que la responsabilidad en esta materia es compartida.

Referencias bibliográficas

- Amoretti M. (2008) *Prisión Preventiva*, Lima, Perú, Editorial Magna Ediciones de Melba Rodríguez Vilca.
- Alva Meneses, M.(2021). *La vigilancia electrónica personal y la vulneración del principio fundamental agravado a propósito de la promulgación del Decreto legislativo N ° 1514*. Recuperado de https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/8765/alva_mcm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ariza Higuera, L. y T. G. M. (2019). *Definiendo el hacinamiento. Estándares normativos y perspectivas judiciales sobre el espacio penitenciario*. 21(2), 227–258. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v21n2/0124-0579-esju-21-02-227.pdf>
- Castillo Dávila, I. (2018). *La proporcionalidad en la prisión preventiva*. UNFV Recuperado de <http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/2825/CASTILLO%20D%20AVILA%20WILLIAM%20PACO%20ANTENOR%20-%20DOCTORADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Colomer Vega, D. (2019). *La doctrina del efecto desaliento como punto de conexión entre el Derecho penal y los derechos fundamentales. Cuadernos Electrónicos de Filosofía Del Derecho*”. Recuperado de: <https://doi.org/10.7203/CEFD.41.13969>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. (2017). *Medidas para reducir la prisión preventiva*. In OEA. Recuperado de: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2017/136.asp>
- Congreso de la República (2018). Proyecto de Ley 2705/2017-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 1322 que regula la vigilancia electrónica. Recuperado de: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictámenes/Proyectos_de_Ley/02705DC15MAY20181210..pdf

Defensoría del Pueblo (2018). *Retos del Sistema Penitenciario peruano. Un diagnóstico de la realidad carcelaria.*

Recuperado de:

<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Retos-del-sistema-penitenciario.pdf>

Dei Vecchi, (2013). *Acerca de la justificación de la prisión preventiva y algunas críticas frecuentes.* Revista de Derecho, Valdivia. Universidad Austral de Chile.

Recuperado de:

<https://scielo.conicyt.cl/pdf/revider/v26n2/art08.pdf>

Del Moral, M. & Rodriguez, J. (2022). *Ejemplo de Ficha Documental.* Recuperado de:

https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2686-ejemplo_de_ficha_documental.html

Espinoza Poma, J., & Loja, U. N. de. (2018). *“Los Dispositivos Electrónicos como Medida Sustitutiva a la Prisión Preventiva”.* Recuperado de [https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20738/1/Jennifer Alexandra Espinoza Poma.pdf](https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20738/1/JenniferAlexandraEspinozaPoma.pdf)

Ferrajoli Luigi (1989). *Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal.* Editorial Trotta.

Recuperado de:

<https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/5694a779b4871166c0edb73b407c9529.pdf>

Gonzales, Giancarlos (2020). *La vigilancia electrónica como alternativa a la prisión preventiva y su contribución al deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios.* Tesis, Universidad de Sipán.

Recuperado

de:

[https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/7892/Gonzales Jimenez, Giancarlo.pdf?sequence=1](https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/7892/GonzalesJimenez,Giancarlo.pdf?sequence=1)

Hernández, R.; Fernández, C.; y Baptista, M. (2014). *Metodología de la*

Investigación. Sexta edición. México: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Kostenwein, Ezequiel (2010). *VI Jornadas de Sociología de la UNLP*

Recuperado de
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5511/ev.5511.pdf

Magán, J. César (2017). *La sobrepoblación en el sistema penitenciario peruano*. International Review of the Red Cross, N.º 903, 2017.

Recuperado de: <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/903-zevallos.pdf>

Maldonado López, (2017), *Análisis de la realidad jurídica en la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica como medida a reducir la carga penitenciaria y sus alcances sociales en el Ecuador*. Tesis Universidad Católica de Guayaquil.

Marcelo, V. (2017). *Historia universal de la prisión preventiva y la detención preventiva en el derecho penal peruano*. Lima.

Recuperado de
http://derecho911.blogspot.com/2017/01/historia-universal-de-la-prision.html#_Toc471752110

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2022). *Nota de prensa “Gobierno invertirá en la adquisición de 8 mil grilletes electrónicos para mitigar hacinamiento en penales”* Nota de prensa, 24 de abril de 2022.

Recuperado de:
<https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/181015-gobierno-penales>

Rojo, n & Yoli, v (2016) *El Abuso de la Prisión Preventiva en el Proceso*.

Universidad Nacional de la Pampa Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Argentina. Recuperado de:
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/rdata/tesis/e_rojela850.pdf

Packer, M (1985). *La investigación hermenéutica en el estudio de la conducta humana*. Psicología Cultural, Universidad del Valle.

Recuperado de

<https://www.ersilias.com/wp-content/uploads/2018/09/La-investigacion-hermeneutica-en-el-estudio-de-la-conducta-humana.pdf>

Pujadas Tortosa (2014). *Para una teoría general de las medidas cautelares penales*. Universidad de Girona.

Recuperado de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129639/tvpt.pdf;jsessionid=BD84FBF9C55E468128D5EB9340A485DF?sequence=7>

Llobet, J. (2009). Preventive Custody and the Presumption of Innocence According To Human Rights Protection Agencies From the Inter-American System. 114–148.

Recuperado:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_399_ing.pdf

Instituto Nacional Penitenciario (2021). *Sistema de información estadística penitenciaria, diciembre 2021*.

Recuperado de:

<https://siep.inpe.gob.pe/form/reporte>

Instituto Nacional Penitenciario (2021). *Nota de Prensa*. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/491268-inpe-informa-ante-el-tribunal-constitucional-sobre-medidas-contras-el-hacinamiento-en-los-penales>

Rodríguez, M. N. (2015). *Hacinamiento penitenciario en América Latina: causas y estrategias para su reducción*. (M. Comisión Nacional de Derecho Humanos (ed.); Primera). Recuperado de http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_HacinamientoPenitenciarioAmericaLatina.pdf

Sánchez, J. (2021). *Excepcionalidad de la prisión preventiva y el peligro procesal. Comentario a la Casación 358-2019, Nacional*. Pasión por el Derecho.

Recuperado de: <https://lpderecho.pe/excepcionalidad-prision-preventiva-peligro-procesal-comentario-casacion-358-2019-nacional/>

Santillán Morales, G. (2021). *Vigilancia electrónica y el hacinamiento en el Penal*

Sarita Colonia, Callao 2021. Tesis para optar el grado de maestros. Escuela de Posgrado Escuela de Posgrado [Universidad César Vallejo]. In Universidad César Vallejo.

Recuperado de: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/74579>

Salcedo, I (2020). *Decreto Legislativo 1514: ¿son los grilletes electrónicos el pasaporte a la semilibertad?* Pasión por el Derecho, julio 2020.

Recuperado de <https://lpderecho.pe/decreto-legislativo-1514-grilletes-electronicos-pasaporte-semilibertad/>,

SPIJ. (2022). *Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal Decreto legislativo No 1322 D.S. N° 012-2020-JUS* (Reglamento de aplicación de la medida de Vigilancia Electrónica Personal) (Issue 90).

Tribunal Constitucional. (2002). *Sentencia del TC. Recaida en el Expediente 01091-2002-HC @ www.tc.gob.pe*. Recuperado de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01091-2002-HC.html>

Tribunal Constitucional. (2020). *Sentencia del TC. Recaida en el Exp. n.° 05436-2014-phc/tc tacna c.c.b.*

Recuperado en: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/05436-2014-HC.pdf>
Universidad Católica de Colombia. (2021). *Fines y funciones de la pena*,

Recuperado de:
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/26822/1/Unidad%202-Teor%C3%ADas%20de%20la%20pena.pdf>

Vilca, K. (2020). *¿Existe vulneración del derecho a la salud en los penales del Perú?* Alliance Asesoría y Consultoría, mayo 2020.

Recuperado de:

<https://ius360.com/existe-vulneracion-del-derecho-a-la-salud-en-los-penales-del-Perú-Alliance-asesoría-y-consultoría/>

Vélez, G. (2010). *El Nuevo Código Procesal Penal: La necesidad del cambio en el sistema procesal peruano*. Recuperado de: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080527_36.pdf

Villavicencio F. (2006) *Derecho Penal Parte General*, Lima, Perú, Editorial Grijley.
Recuperado de: <https://proyectozero24.com/wp-content/uploads/2021/09/Villavicencio-Terreros-2006-Derecho-Penal.-Parte-General.pdf>

Zapata, L (2019) *Prisión Preventiva Y La Observancia Del Debido Proceso En El Distrito Judicial Del Callao*. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, Perú.
Recuperado de http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/4487/TESIS_ZAPATA_LUIS.pdf?sequence=2&isAllowed=y

ANEXOS

ANEXO 1

Matriz de coherencia interna

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	PROBLEMAS DE INVESTIGACION	HIPÓTESIS/SUPUESTOS CATEGÓRICOS	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	FUENTES	MÉTODOS-TECNICAS	INSTRUMENTOS
<p>En la actualidad el Ministerio Público y el Poder Judicial vienen aplicando en forma intensiva la institución de la prisión preventiva, el mismo que ha sido criticado por importantes académicos nacionales e internacionales y algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. Este hecho ha ocasionado que exista un grave hacinamiento penal que pone en peligro muchos derechos fundamentales de los presidiarios. El Estado ha aprobado normas desde el año 2010 sobre la vigilancia electrónica (Grilletes) para que determinados presidiarios puedan cumplir su encierro en sus domicilios, lo que les permitirá realizar algunas labores de resocialización. Se formula la siguiente interrogante: ¿De qué manera la vigilancia electrónica incide en el hacinamiento por prisión preventiva en el Perú 2021?</p>	<p>PROBLEMA GRAL ¿De qué manera la vigilancia electrónica incide en el hacinamiento por prisión preventiva en el Perú 2021?</p>	<p>La prisión preventiva y el hacinamiento penal tienen una relación directamente proporcional, (a mayor prisión preventiva es mayor el hacinamiento penitenciario). De otro lado, la relación entre la vigilancia electrónica y el hacinamiento por prisión preventiva es inversamente proporcional, (es decir a mayor aplicación de la vigilancia electrónica será menor el hacinamiento por prisión preventiva). Por tanto, la aplicación mínima de la prisión preventiva no incide significativamente en el hacinamiento penitenciario por prisión preventiva.</p>	<p>OBJETIVO GRAL Establecer la incidencia de la vigilancia electrónica en el hacinamiento por prisión preventiva en el Perú 2021.</p>	<p>C1: La vigilancia electrónica</p>	<p>1.1 La Costos de aplicación 1.2 Aplicación de la VE.</p>	<p>1.1 Libros, artículos, tesis, sentencias, jurisprudencias, Resoluciones de organismos internacionales.</p>	<p>Analítico descriptivo Enfoque cualitativo Diseño no experimental. Utiliza métodos jurídicos: la exégesis, la hermeneútica.</p>	<p>Guía de preguntas de entrevista</p> <p>Formato de revisión documental</p>
			<p>OBJETIVO E-1 a) Comprender la naturaleza jurídica de la Prisión Preventiva y su relación con la Vigilancia electrónica. b) Identificar los derechos vulnerados de los procesados con prisión preventiva. c) Comparar el tratamiento de la vigilancia electrónica en el Perú y en el derecho comparado. d) Analizar los resultados del Uso de la Vigilancia Electrónica en relación con el hacinamiento penitenciario.</p>	<p>C2: El hacinamiento por prisión preventiva</p>	<p>2.1 Características de la Prisión preventiva 2.2. Vigilancia electrónica por la prisión preventiva</p>	<p>1.2 Opiniones y puntos de vista de abogados especializados entrevistados.</p>	<p>Técnicas -Entrevistas - Análisis documental</p>	

ANEXO 2

Guía de entrevista



Universidad
Inca Garcilaso de la Vega

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TESIS

**LA VIGILANCIA ELECTRONICA Y SU INCIDENCIA EN EL
HACINAMIENTO POR PRISION PREVENTIVA EN LIMA METROPOLITANA
2021**

PRESENTADO POR: Héctor Misael Castro Bustamante

Instrumento
GUIA DE ENTREVISTA

GUÍA DE ENTREVISTA

Tesis:

**LA VIGILANCIA ELECTRONICA Y SU INCIDENCIA EN EL HACINAMIENTO
POR PRISION PREVENTIVA EN LIMA METROPOLITANA 2021**

Técnica de investigación: Entrevista

Instrumento: Guía de Entrevista semiestructurada

ENTREVISTA

Para abogados especialistas

I.- DATOS DEL ENTREVISTADO

1.- Entidad donde labora: Estudio jurídico privado (), órgano judicial (),
Ministerio Público () INPE () Defensoría del Pueblo () Otros ()

A- Nombre y Apellidos

.....

B.- Numero de Registro del Colegio de Abogados

II.- CUESTIONARIO

Tema o tópico

LA PRISIÓN PREVENTIVA PERUANA EN LA ACTUALIDAD.

Preguntas guías

1.- ¿Considera adecuada la prisión preventiva que se aplica en el Perú actual?

Si () No ()

Explique brevemente ¿Por qué?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hacinamiento penal en el Perú actual

Preguntas guías

2.- En su opinión ¿la prisión preventiva sería una de las causas que originan el hacinamiento penal en el Perú? Si () No ().

Explique brevemente ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

Tema o tópico

Aplicación de la vigilancia electrónica (Grilletes)

Preguntas guías

3.- ¿Considera que la vigilancia electrónica (Grilletes) podría ser parte de la solución del hacinamiento penal en el Perú? Si () No ()

. Explique brevemente ¿Por qué)

.....

.....

.....

.....

.....

4.-¿Tiene usted alguna observación a las preguntas realizadas?

.....

.....

.....

.....

Consentimiento informado

ANEXO 3

Especialistas a entrevistados

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	ESPECIALIDAD	FUNCIÓN
01	Ampuero Sánchez Hernán	Penalista	Defensor
02	Palomino Hidalgo Quenne Yahaira	“Penalista”	Defensora
03	Ampuero Linares Percy	“Penalista”	Juez penal
04	Barrionuevo Fernández R.	“Penalista”	Defensor
05	Mendoza herrera Leysi	“Penalista”	Defensor
06	Franco Romero Raúl	“Penalista”	Defensor
07	Haro Vargas Carlos “	“Penalista”	Defensor
8	Valdivia Rodriguez Kenny	“Penalista”	Fiscal
9	Joan Odar Padilla	“Penalista”	Fiscal
10	Moya Chung Erick	“Penalista”	Defensor
11	Jessica Leal Fabian	“Penalista”	Defensora
12	Mendoza Herrera Luis	“Penalista”	Defensor

Anexo 4

Evolución normativa de la vigilancia electrónica

Norma jurídica	Título de la norma	Fecha de publicación	objetivo
Ley 29499	Ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y modifica el artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo núm. 635; modifica los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 654.	19-enero-2010	Crea por primera vez la vigilancia electrónica en el Perú, incorporándolo al Código Penal y al Código Procesal Penal. Puso como condición que el preso asuma los costos de la implementación de la VE.
Decreto Legislativo 1322	Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal	6-enero-2017	Elevó la pena a 8 años para que puedan beneficiarse mayor número de presos. Derogó los artículos 1,2,3,3-A,8,9y10 de la Ley 29499 y sus modificatorias, Ley que establece la vigilancia electrónica personal
D.S. 004-2017-JUS	Reglamento del D. Leg. 1322	9-marzo-2017	Establece medidas para implementar el plan piloto
D.S. 016-2017-JUS	Aprueban los Protocolos Específicos de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal prevista en el Decreto Legislativo 1322)	22-julio 2017	Protocolos Específicos de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal
D.S. 006-2018-JUS	Aprueban el Calendario Oficial para la Implementación Progresiva de la Vigilancia Electrónica Personal DECRETO SUPREMO 006-2018-JUS	15-mayo-2018	Implementación progresiva de la Vigilancia electrónica.
Decreto Legislativo 1514	Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento	04-junio-2020	Deroga el inciso e) del Artículo 9 del D.-Leg. 1322, relativo a los costos que tiene que asumir el preso por la VEP. Dispone que el INPE financia los costos de aplicación de la VE. (Modif. Art. 14 del D.Leg. 1322).
D.S. 012-2020-JUS	Reglamento de aplicación de la medida de Vigilancia Electrónica Personal	23-octubre- 2020	Reglamenta por segunda vez al D. Legislativo 1322. Deroga al D.S. 004-2017-JUS
Decreto Legislativo 1513	Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19	4 de junio 2020	Disminuir la población carcelaria vulnerable para evitar el contagio masivo de Covi 19 en los penales peruanos.

Fuente: Elaboración propia con datos normativos de SPIJ

Anexo 5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. (2017). Medidas para reducir la prisión preventiva. In OEA.



OEA • Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) • Prensa • Comunicados • 2017 • 136

Comunicado de Prensa

CIDH presenta Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva

7 de septiembre de 2017

Ciudad de México - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy un [Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América](#). La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.

A+ A-

La Comisión reconoce y valora los importantes esfuerzos realizados por los Estados para reducir el uso de la prisión preventiva, pero su utilización sigue siendo general y excesiva. En la región, el promedio de personas en prisión preventiva es 36.3% del total de la población penitenciaria, superando el 60% en algunos países. Las medidas necesarias para reducir el uso abusivo de la prisión preventiva y responder a la crisis penitenciaria son conocidas, y hasta cierto punto, ya probadas. Sin embargo, la CIDH manifiesta su preocupación por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para hacer efectiva la implementación de dichas medidas y urge a los Estados a realizar las acciones necesarias para que la prisión preventiva se utilice de conformidad con su naturaleza excepcional, reduciendo así los altos niveles de hacinamiento que caracterizan la región.

"El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática", dijo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro.

El principal objeto del informe es dar seguimiento al [Informe sobre el uso de la prisión preventiva en América de 2013](#), mediante el análisis de los principales avances y desafíos en el uso de esta medida por parte de los Estados. En particular, se realiza un seguimiento a las recomendaciones relativas a políticas del Estado, erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada o herramienta de control social, defensa pública, uso de medidas alternativas, y celeridad en los procesos y corrección del retardo procesal. Asimismo, el informe incorpora una perspectiva de género y un enfoque diferenciado respecto a personas que pertenecen a diversos grupos en situación especial de riesgo, tales como personas afrodescendientes, indígenas, personas mayores, personas con discapacidad y personas con orientaciones sexuales y expresiones o identidades de género diversas.

De igual forma, el informe proporciona recomendaciones dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales en la materia, con un énfasis en la aplicación de medidas alternativas que permiten que la persona imputada se encuentre en libertad mientras se tramita el proceso penal. "Son muchas e importantes las ventajas de aplicar medidas alternativas para racionalizar el uso de la prisión preventiva y ajustar su uso a los estándares interamericanos e internacionales", dijo el Relator Cavallaro. "Cuando se utilizan medidas alternativas, se evita la desintegración familiar y la estigmatización de la comunidad, se disminuyen las tasas de reincidencia y se utilizan de manera más eficiente los recursos públicos", agregó.

Existen numerosos obstáculos para reducir el uso de la prisión preventiva. Por ejemplo, a las autoridades judiciales que aplican medidas alternativas se les sanciona disciplinariamente, como medio de presión o castigo. Se suma a esto una inadecuada defensa pública y la falta de coordinación interinstitucional entre actores del sistema de administración de justicia. Asimismo, existe una tendencia en la región a proponer mayores niveles de encarcelamiento como respuesta a la inseguridad ciudadana. Esto resulta en la adopción de leyes y prácticas que privilegian la aplicación de la prisión preventiva y que restringen la posibilidad de aplicación de medidas alternativas. En los discursos de altas autoridades prevalecen las propuestas de aplicar políticas llamadas "de mano dura", que se enfocan en la privación de libertad como respuesta a la inseguridad ciudadana, y consecuentemente privilegian la aplicación de la prisión preventiva. Ello, a su vez, genera presión de los medios de comunicación y de la opinión pública para aplicar este tipo de políticas.

"La inseguridad ciudadana es un grave problema en la región y la población tiene derecho a exigir que se tomen medidas para resolverla", dijo el Presidente de la CIDH, Comisionado Francisco Eguiguren. "Sin embargo, está demostrado que las políticas de mano dura no solamente son violatorias de los derechos humanos de las personas, sino que además resultan ineficaces para garantizar la seguridad ciudadana. Una de las consecuencias más graves y preocupantes es que su aplicación ha llevado a un aumento sin precedentes de la cantidad de personas que están en prisión preventiva, sin sentencia, agravando el hacinamiento carcelario", señaló.

En el contexto de la respuesta punitiva a la inseguridad ciudadana, el consumo y posesión de drogas para uso personal, así como otros delitos menores cometidos por uso el dependiente o problemático de estas sustancias, son seriamente castigados. Dichas conductas son

Enlaces relacionados

[INFORME: Medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva \(2017\)](#)

[GUÍA PRÁCTICA: para reducir la prisión preventiva \(2017\)](#)

[Informe sobre el uso de la prisión preventiva \(2013\)](#)

[Informes temáticos de la CIDH](#)

Datos de contacto

Oficina de Prensa y
Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9000

Más sobre la CIDH

[Comunicados de prensa](#)
[Sitio web de la CIDH](#)
[CIDH en Facebook](#)
[CIDH en Twitter](#)
[CIDH en Youtube](#)
[CIDH en Flickr](#)

caracterizadas en las legislaciones como "delitos graves" y la prisión preventiva es aplicada de manera automática, sin que las personas imputadas puedan beneficiarse de alternativas al encarcelamiento. El endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas ha resultado en un notable incremento del número de personas privadas de libertad en la región, y ha afectado de manera especial a las mujeres. La CIDH manifiesta su particular preocupación ante este problema y urge a los Estados de la región a estudiar enfoques menos restrictivos, a través de la descriminalización del consumo y posesión de drogas para uso personal.

Otro tema de preocupación para la CIDH es que a fin de reducir el uso la prisión preventiva, algunos Estados han implementado procesos abreviados o inmediatos, que se caracterizan por disminución de los plazos procesales, confirmación de sentencias en un menor lapso de tiempo, y ofrecimiento de oralidad. Estos procesos suelen afectar el debido proceso y se condena a personas imputadas de manera arbitraria, con base en procesos sumarios, sin garantías suficientes, y que afectarían el derecho a una defensa adecuada. Además, los procesos abreviados o inmediatos no resultan en medidas eficaces para hacer frente al hacinamiento, debido a que únicamente se estaría incrementando la cantidad de personas condenadas de manera arbitraria.

La CIDH reconoce las buenas prácticas adoptadas por Estados de la región, como la reducción de los plazos de la prisión preventiva, la creación de programas especiales para el monitoreo electrónico de seguimiento y el establecimiento de servicios para verificar riesgos procesales y supervisar medidas cautelares. Asimismo, valora los esfuerzos relativos a la implementación de programas de justicia restaurativa, revisiones periódicas de casos en prisión preventiva, realización de audiencias en las cárceles y celebración de audiencias previas sobre la determinación de la prisión preventiva, a fin de evitar privaciones de libertad innecesarias. La Comisión insta a los Estados de la región a seguir avanzando en la aplicación de este tipo de medidas.

Por medio de este informe, la Comisión Interamericana ofrece recomendaciones específicas a fin de que los Estados corrijan la excesiva aplicación de la prisión preventiva, en especial a través de la utilización de medidas alternativas. La CIDH urge a los Estados de la región a garantizar que la prisión preventiva sea de carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Además, para hacer efectivas las recomendaciones del informe, la CIDH urge a los Estados a involucrar a la sociedad civil, y a las mismas personas destinatarias de dichas políticas estatales, a fin de asegurar que el diseño y la implementación de las políticas dirigidas al uso racional de la prisión preventiva resulten integrales, participativos e inclusivos.

Este informe se acompaña de una [Guía Práctica para Reducir la Prisión Preventiva](#), dirigida a las autoridades encargadas de atender los desafíos inherentes a la reducción del uso excesivo de la prisión preventiva.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 136/17

© Copyright 2022 OEA

[Pasantías](#) [Becas](#) [Empleos](#) [Términos y Condiciones](#) [Contáctenos](#) [Enlaces Relacionados](#)

1889 F St. N.W. Washington, DC, U.S.A. 20006 / E-mail: cidh@oas.org / Teléfono: (202) 370-9000 / Fax: (202) 458-3650

Anexo 6

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Tribunal Constitucional. (2020). STC. Exp. n.º 05436-2014-phc/tc Tacna

<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/05436-2014-HC.pdf>

Anexo 7

Acuerdo Plenario N° 02-2019/CJ – 116 Vigilancia electrónica personal

<https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/Acuerdo.PlenarioN-02-2019-CJ-116.pdf>